

Carta Financiera es una publicación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF

Resolución nº 002012 de 1975
Tarifa postal reducida 604 de Adpostal
ISSN nº 0120-343

DIRECTOR
Fabio Villegas Ramírez

SUBDIRECTORA
Natalia Salazar Ferro

SECRETARIA GENERAL
Helena Hidalgo de Peláez

INVESTIGADORES ANIF
Ximena Lombana
Paula García
Rodrigo Moreira
Juan Guillermo Caicedo
Diego Fernando Prada
Guillermo Bonilla
Francisco Mejía
Catalina Prieto
José Ignacio López

PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA
Luz Stella Sánchez
Sandra Venegas

DISEÑO CARÁTULA
Diego Amaral

IMPRESIÓN
Sáenz Cía S.A.

DIRECTORA DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
María Inés Vanegas
Publimarch Ltda Tel. 312 45 03

EJECUTIVA DE CUENTA
Claudia Patricia Sánchez



SUSCRIPCIONES
Adriana Bohórquez Calle 70 A nº 7-86
Tels 543 30 55 / 310 15 00 / 312 44 70
Desde cualquier parte del país sin costo
01 800 011 99 07
Fax 235 59 47 / 312 45 50 Bogotá

CORREO ELECTRÓNICO anif@anif.com.co
INTERNET <http://www.anif.org>

Se prohíbe la publicación parcial o total de los artículos de Carta Financiera sin previa autorización

editorial

actualidad económica

- 7 | Cinco grandes éxitos bailables
de la economía política colombiana
Luis Carlos Valenzuela
- 16 | Transparencia contra la corrupción:
por el buen uso de los recursos públicos
Antonio Hernández Gamarra
- 20 | Una propuesta para el mercado de TES
Rodrigo Suescún
- 25 | Proteccionismo contra exportaciones
- 26 | Grupo Andino: *Requiescat in pace*
- 28 | Aranceles, impuestos y mitos
- 30 | Altibajos comerciales
- 33 | Paradojas comerciales
Rodrigo Botero Montoya
- 35 | Las reformas: laboral y pensional
María Alejandra White
- 38 | La construcción: a aprovechar los
estímulos del gobierno
- 43 | Moneda y crédito
- 47 | Crónica macroeconómica
- 50 | Industria, comercio y construcción
- 55 | Trimestre Legal

economía internacional

- 58 | Venezuela en un mar de icebergs
- 67 | La encrucijada de Ecuador

entrevista

- 72 | La estrategia de financiamiento
de la administración Uribe
Entrevista a Carlos Rodríguez,
director de Crédito Público

Cinco grandes éxitos bailables*

de la economía política colombiana

Luis Carlos Valenzuela¹

El texto que se presenta a continuación es la transcripción de una conferencia dictada en una convención de distribuidores de gasolina a comienzos del año 2001. Su extensión fue reducida significativamente para adecuarla al tamaño de un artículo de la revista.

El objeto del texto es mostrar de una manera coloquial, no académica, cómo se toman decisiones de política económica y lo fácil y triste que es destruir medidas a punta de prejuicios y lugares comunes. El tema de la liberación de precios de la gasolina, que supuestamente era el tema de la conferencia, no es más que un hilo conductor. El objeto real era mostrar el impacto social de lo que se denominaron los mitos económicos, o en su versión más nostálgica los cinco grandes éxitos bailables de la economía política colombiana, que era el título original de la conferencia.

Introducción

Cuando me pidieron que dictara una conferencia sobre liberación de precios de gasolina, me dio una enorme pereza. No sólo el tema es profundamente árido, sino que intenté miles de veces explicarlo y miles de veces fracasé. Por eso pensé que de pronto era más divertido explicar el fracaso, que el tema mismo.

El resumen del fracaso es que la medida tuvo demasiado de economía y muy poco de política, y la economía sin política no sirve para nada. No trasciende.

La barrera para que los conceptos e ideas trasciendan son los mitos. Esos conceptos contundentes que no dicen nada, pero que nos evitan el esfuerzo de pensar.

“Aquí lo que hay que hacer es cerrar el Congreso y acabar con esa vagabundería”. Mito. “Necesitamos un presidente diferente. No más de lo mismo.” Mito. “La oligarquía colombiana defiende el establecimiento y las instituciones”. Mito. “Hay que leer prensa para estar informado”. Mito. “Lo teórico es malo, lo práctico es bueno”. Mito. “A Ecopetrol lo acabó la USO”. Mito. “A este

* El texto que publicamos a continuación corresponde a una conferencia del doctor Valenzuela en el año 2001. Algunas cifras y eventos deben entonces ser mirados en perspectiva. Consideramos, sin embargo, que el texto es rico en argumentos y aporta a la generación de un debate sobre la economía política del país.

¹ Luis Carlos Valenzuela. Economista de la Universidad de los Andes con posgrados en la misma universidad, en la Universidad de Harvard y en el London School of Economics. Se ha desempeñado como presidente de la Corporación Financiera del Valle, presidente de Celumóvil, vicedirector de Desarrollo y ministro de Minas y Energía.

país lo tiene acabado la política". Mito.

Lamentablemente la economía política está llena de mitos y de verdades preconcebidas sin sustentación alguna. Estas verdades preconcebidas generan pobres ideologías y reacciones preestablecidas que constituyen la más grande de las barreras para iniciar cualquier proceso de cambio.

Antipolíticos

El primer mito, o éxitoailable de la economía política colombiana, es el de los antipolíticos.

"Los políticos son malos. Lo nuevo, lo diferente, lo antipolítico es bueno. No más de lo mismo."

Toda persona que aspire a un puesto público de dirección es, esencialmente, un político. Es alguien que considera que tiene ideas que merecen ser ejecutadas y para este propósito debe ser elegido o nombrado. La política es una actividad de enorme nobleza.

El concepto del antipolítico no pasa de ser una payasada. Lo peor es que es efectivo. La política es la única actividad en que la forma más fácil de ascender es negarse.

Es como si en una empresa los resultados estuvieran lejos de ser los adecuados y alguien que tuviera la intención de reemplazar al gerente llega con el Cuento Chino de que él es el "antiempresario". La lógica es clara: si un empresario llevó a la empresa a la difícil situación en la que se encuentra, entonces lo que se requiere es un antiempresario. ¿Qué demonios quiere decir un antiempresario? Debe ser alguien que jamás ha visto una empresa, que no distingue un pasivo de un activo y que EBITDA le suena a marca de camisas, algo así como Rathzel o Pat Primo.

Exactamente la misma estupidez es la historia de los antipolíticos. Alguien cuya carta de presentación es su desconocimiento del funcionamiento del sector público. Sobre esta base debe ser que el Congreso se llena de actrices de televisión y de gente cuya característica principal es el odio y la visceralidad. Éstos son los encargados de determinar reformas tributarias, redefinir los mecanismos de financiación de vivienda y de diseñar el sistema pensional que genere una mayor equidad intergeneracional.

**El concepto del
antipolítico no
pasa de ser una
payasada. Lo peor
es que es efectivo.
La política es la
única actividad en
que la forma más
fácil de ascender
es negarse.**

¿A quién queremos elegir? ¿A quien mejor insulte? ¿A quien diga las frases más ingeniosas que constituyan titular de periódico? ¿A quien sea más incendiario y haga las más temerarias acusaciones? O más triste que todo lo anterior, ¿a quien sea nuevo? Nuevo y diferente. Eso de pronto es válido para elegir toallas sanitarias o desodorantes, pero jamás para elegir a quienes nos dirijan. Por elegir políticos como si fueran toallas sanitarias o desodorantes es que terminamos siendo tratados como tales.

¿Yo estoy indignadísimo y tú?

Pasemos al segundo de los grandes mitos, de los éxitosailables.

"Indignarse es la respuesta correcta y altiva de la gente de bien." (Gente gente. Gente gentísima.)

Cuando los grandes hombres que elegimos, los nuevos, los diferentes, los antipolíticos, los no más de lo mismo, no satisfacen todos nuestros poco pensados requerimientos, desarrollamos algo que se ha convertido en un deporte nacional: LA INDIGNACIÓN. Todos vivimos indignados.

Indignados por el nivel de desempleo; indignados con la incoherencia de la guerrilla; indignados con el Congreso; indignados con lo que entendemos y aún más con lo que no.

Se indigna todo el *foursome* antes del hoyo uno. Se indignan las modelos del Bogotá Fashion Show. Se indignan los editorialistas de izquierda y los de derecha (entre más radicales, más indignados.) Nadie, absolutamente nadie que sea alguien en Colombia no está lleno de indignación. Baste decir que no hay mejor plataforma política que estar indignado.

Los periódicos cuya función es estar al día traen todos los días titulares indignantes. La doble labor de informar e indignar es sumamente importante, porque ¿qué sería de un día normal sin uno poder decir cosas como "¿viste lo del descaro del BOT?," o "la apertura si nos tiene acabados, ¿no? Qué brutos". Lo de menos es tener la más remota idea de que es un BOT o la apertura. Un "qué brutos" bien echado supera todo. ¿Para que gastar el tiempo tratando de entender?

Al país no lo arregla la gente indignada. Al país lo arregla la gente que da peleas, la gente que tiene heridas. La gente que se indigna, pero cortico, e inmediatamente vuelve a las batallas,

a ganar peleas, o a ganar heridas. No importa. Los indignados no pelean. Tienden a volverse cobardes o columnistas. Los indignados, en el mejor de los casos, terminan gordos y tristes comiendo helados en Dadeland. Qué horrible ser indignado.

La maldad de lo económico

Tercer mito:

La maldad de lo económico

“Los economistas son perversos, gentequita sin corazón, sin la más mínima sensibilidad social.”

Alguna vez en el Congreso, ya cansado de críticas respecto a la insensibilidad de las medidas propuestas, contesté que en realidad tenían absolutamente toda la razón, que mi objetivo central en la vida para aceptar el Ministerio de Minas había sido el de levantarme a las cuatro de la mañana a pensar en cómo subir las tarifas de energía de los estratos más pobres de la población y en cómo disparar el precio de la gasolina para que de esa manera aumentara el precio del transporte público y los alimentos.

Esa vocación de maldad me la había descubierto mi mamá cuando me encontró descuartizando un gatico a la tierna edad de cuatro añitos. El Presidente, se los confesé, me había encontrado en un centro de rehabilitación de sicópatas neoclásicos.

Veamos ejemplos de medidas económicas y lo fácil que es satanizarlas.

Los incrementos de tarifas de energía son vistos como políticas diabólicas, asociadas al más canalla nivel de neoliberalismo.

En la medida en que las tarifas no reflejen el costo de producir energía, ningún privado va a hacer las inversiones necesarias para realizar la ex-

pansión del sector eléctrico. La primera respuesta es que esto no constituye ningún problema, dado que la Constitución establece que la prestación de servicios públicos es una obligación del Estado; entonces estas inversiones se realizan con dineros del Presupuesto Nacional y las tarifas no sólo se pueden congelar, sino que incluso pueden llegar a reducirse. Santo remedio.

En realidad, aunque esto permite canalizar decenas de miles de votos, no constituye remedio y mucho menos santo.

El sector eléctrico colombiano tiene una capacidad de generación de 12.000mw, y asumiendo un crecimiento racional de la economía que es del orden de 5%, se requeriría construir aproximadamente unos 600

En la medida en que las tarifas no reflejen el costo de producir energía, ningún privado va a hacer las inversiones necesarias para realizar la expansión del sector eléctrico.

mw año. Con un costo promedio por mw de US\$ 700.000, esto implica una inversión del Estado de US\$450 millones. Todos tan contentos.

El problema es de donde salen los US\$450 millones. Hay dos alternativas. La primera es hacer lo que se denomina un contracrédito presupuestal, que básicamente implica quitarle la partida a otro rubro y pasársela al de construcción de centrales de generación. Veamos las consecuencias: o desfinanciar 30% del presupuesto de educación y salud, o eliminar 50% del ejército.

Pero, ¿a quién le importa?, eso tan sólo se refleja en menos salud, que no

es algo particularmente importante; o en menos educación, que para el bienestar futuro de la sociedad tampoco tiene mayor impacto; o en la total ausencia de seguridad ciudadana que parece ser algo que les sobra a los colombianos.

Es que lo fácil es decir en un noticiero de televisión que hay que congelar tarifas. Más circo para el circo. Lo difícil, lo que nunca se hace, porque qué pereza, qué pocos votos trae y qué pocos aplausos, es explicar la consecuencia de esta selección implícita de alternativas. ¿Quién se iba a imaginar que quien plantea la congelación de tarifas eléctricas lo que está planteando es el desmonte de la salud y de la educación pública? ¿Quién se lo iba a imaginar? Ese, ese fue el que realmente descuartizó al gatico.

Siempre me he preguntado por qué cuando suben las tarifas de agua y alcantarillado hay un periodista entrevistando a la anciana a la que se le incrementó la tarifa en 100%, pasando de \$1.000 a \$2.000. Es indudable que dado el nivel de miseria de este país 1.000 están lejos de ser una suma deleznable. Pero ese no es el problema. El problema real es por qué no le preguntan a 50% del país que no recibe servicios sanitarios básicos si considera equitativo que el subsidio para quienes tienen el servicio se haga a costo de no poder proveer el servicio a quienes no lo tienen. ¿Quién está en una situación más difícil, la pobre señora que abre el noticiero con la nota de la joven reportera cargada de sensibilidad social, o quien tiene que ver pasar las aguas negras por su casa y no tiene factura que la acredite para que... desde Agua Blanca les habló Tracy Rodríguez de la Unidad Investigativa del noticiero?

La alternativa al traslado presupuestal para financiar la infraestructura eléctrica es que el gobierno incre-

mente su endeudamiento. Eso qué importa. Que el gobierno emita más o menos TES nos tiene absolutamente sin cuidado. No nos importa porque ni siquiera sabemos que es un TES y todo aquello que uno no sepa que es, o no importa, o es alguna porquería nueva que está haciendo el gobierno.

Lamentablemente los TES si importan. En la medida que el gobierno emita papeles para financiarse lo que está generando es una mayor demanda por un mismo volumen de ahorro

Nadie, absolutamente nadie, quiere tarifas altas de servicios públicos. Lamentablemente la Hacienda Pública no es un problema de qué se quiere y qué no se quiere, sino un problema de prioridades con restricciones.

que tienen los colombianos. Está compitiendo por los mismos recursos con los empresarios que requieren crédito para mantener las empresas generando empleo.

Un incremento en la demanda para financiar el déficit fiscal del gobierno en un nivel del orden de US\$ 500 millones puede implicar el aumento de las tasas de interés en un rango de 1.5%. En la medida en que la mayor parte de los empresarios está en una situación crítica y su utilidad operacional difícilmente permite cubrir los intereses de la deuda, entonces la forma de cubrir este sobre costo y mantener a sus empresas a flote es hacer una reducción de costos.

Sobre la base de que la deuda en pesos colombiana es del orden de US\$15 billones, un incremento de

1.5% en la tasa de interés implicaría un mayor pago de las empresas del orden de US\$225 millones. Como los márgenes operacionales no dan, la única forma de cubrir ese sobre costo es sacando gente. Calculando un salario promedio, incluidas prestaciones, del orden de \$6 millones anual, esto podría llegar a implicar la pérdida de trabajo de 115.000 colombianos. Estimando una familia promedio con cuatro dependientes por cada asalariado, esto estaría dejando en la miseria absoluta a 575.000 colombianos, que por no poder ser identificables Tracy Rodríguez nunca los va a entrevistar para abrir noticiero. Tracy, nuestra voluptuosa y sensible heroína de la Unidad Investigativa no siente tristeza por los anónimos: los que no tienen empleo; los que no generan *rating*.

Nadie, absolutamente nadie, quiere tarifas altas de servicios públicos. Lamentablemente la Hacienda Pública no es un problema de qué se quiere y qué no se quiere, sino un problema de prioridades con restricciones.

El caso de la gasolina no es diferente. La racionalidad que había detrás del tema era que el subsidio era un gasto originado en un ingreso que podría destinarse a usos alternativos. El punto no es si era o no bueno subsidiar la gasolina, sino si los casi US\$3 billones que Ecopetrol había gastado en vender la gasolina por debajo de su costo de oportunidad hubieran tenido mejores usos sociales alternativos.

La forma como se manejaba el precio de la gasolina históricamente tenía dos consecuencias graves sobre la sociedad colombiana, particularmente sobre sus estratos bajos.

Primero, el hecho de que cada año, en enero, se fijara el aumento del precio de la gasolina era el mayor generador de inflación inercial. Lo que en realidad se fijaba no era el precio de la gasolina sino el índice de inflación, ya que esto constituía la patente de corso para que todo el mundo subiera los precios en la misma proporción, independiente del peso ponderado que tuviera la gasolina en su propia producción.

La inflación es reconocida como uno de los impuestos más regresivos posibles. Es un impuesto que recauda el gobierno, ya que puede emitir contra el incremento de precios. Desde la Edad Media se conoce como el impuesto del señoraje. El impuesto cobrado por los señores feudales a sus siervos.

¿Por qué esa característica de la inflación? Porque sólo afecta a los activos líquidos. Si alguien tiene un inmueble, salvo casos de recesión extrema, en la medida en que los precios suben, sube el valor del inmueble. Si tiene acciones, algo similar sucede, porque las compañías suben sus precios y por ende suben sus valores nominales. A quien afecta la inflación es a quien sólo tiene activos monetarios, a quien tiene el mayor porcentaje de su patrimonio en activos líquidos. Y nada es más líquido en una sociedad que un pobre. Un pobre, en el mejor de los casos, cuando tiene acceso a ello, todo lo que posee es su salario. En la medida en que los precios aumenten en 20%, su sueldo pierde inmediatamente en términos reales 20%.

Mientras tanto siguen los titulares respecto al absurdo de la liberación del precio de la gasolina. En el Congreso nacen adalides contra la medida y piden desobediencia ciudadana. En el Consejo de Ministros todo el mundo se indigna y dice que esto es insostenible, que hay que volver a lo de antes y efectivamente, así se hace. Es que a nosotros con

esta vocacioncita de cangrejo que tenemos es increíble cómo nos gusta volver a lo de antes. Volver a la Edad Media, volver a la inflación por decreto, volver a destruir el salario real.

Pero no sólo está el problema de la inflación inducida, también está el tema de los criterios de prioridad. Entre el año 1994 y el año 1999 el país gastó US\$3 billones en subsidiar gasolina. No los gastó Ecopetrol, los gastó toda la sociedad colombiana.

¿Será que si uno se va a Aguachica, Cesar, donde la cobertura de agua potable es un desastre y le pregunta a la población si prefiere alcantarillado o subsidio a la gasolina, cuando ellos ni siquiera bus toman, será que contestan gasolina? Probablemente contestarán que agua. Si a las miles de madres colombianas que ven morir a sus hijos antes de los dos años por disenterías no controladas se les pregunta si hubieran preferido poder salvar la vida de sus hijos o gastar US\$3 billones en subsidios de gasolina, no tengan duda de cuál será la respuesta.

Sólo si le preguntan al 20% más rico de la población, que es el que directa e indirectamente consume 60% del combustible en Colombia, contestará racionalmente que está de acuerdo con el subsidio a la gasolina. Es lindo que la pauperizada sociedad colombiana nos regale dinero para llenar las Cherokees, que particularmente cuando se blindan consumen un horror de gasolina.

Los pobres son una gente realmente linda. No tienen siquiera como pagar la educación y la salud de sus hijos y aún así deciden subsidiar nuestra forma de vida. Y los comunistas también son lindos. Hay que verlos como marchan con sus pancartas defendiendo el derecho a que nos subsidien la electricidad y la gasolina. Malos serían si pensarán que los recursos públicos deben gastarse con carácter redistributivo y dirigirse a

los estratos bajos de la población. Eso sería el colmo, teniendo en cuenta que los impuestos los pagamos nosotros: la gente gentísima.

Anarco-oligarquía

Cuarto mito.

“La clase alta colombiana es la esencia de la protección del orden establecido, de la institucionalidad. Esto es evidente ya que es a ellos a quienes favorece el orden esta-

Sólo si le preguntan al 20% más rico de la población, que es el que directa e indirectamente consume 60% del combustible en Colombia, contestará racionalmente que está de acuerdo con el subsidio a la gasolina.

blecido.”

Falso. Absolutamente falso. Somos el único país del mundo donde la oligarquía es anárquica. Tenemos una clase social única en el mundo, la anarco-oligarquía. Nihilismo de club, pero nihilismo.

En los dos últimos años me he paseado por el Caguán, por el Magdalena Medio; me he sentado muchas veces con las cabezas de los mayores sindicatos de este país y más recientemente volví de paseo por las Juntas Directivas, esos sitios donde a punta de palmaditas en las mesas se define el país. Créanmelo,

anarquía de verdad verdad, sólo en los sitios donde se mueven grandes cantidades de dinero. Los otros no pasan de ser pichoncitos de revolucionarios.

La mejor forma de ilustrar esto es con un ejemplo reciente que fue el Referendo para revocar el Congreso. Circo, más circo. Aquí no nos cansamos.

(Cuando esto se escribió el tema era el Referendo promovido por Pastrana para revocar el Congreso. Como en el caso de la gasolina, esto no pasa de ser un ejemplo coyuntural. Lo de la anarco-oligarquía no es tan sólo un ejemplo. Es un patrón de comportamiento).

En ese momento se pusieron en juego los rezagos de la ya infinitamente frágil institucionalidad colombiana. El Presidente decidió que no le gustaba la mitad de la representación de la democracia, el Congreso, y decidió revocarlo. El Congreso decidió que no le gustaba la otra mitad de la democracia, el Presidente, y decidió revocarlo. El mundo entero consideró que aunque el comportamiento colombiano tradicionalmente ha sido digno sujeto del *show* de Bebé, Pernito y Tuerquita, aquí sí se les había ido la mano; lo que se reflejó en la consideración de que el riesgo de invertir o prestarle al circo se había disparado y los *spreads* sobre el tesoro, la prima sobre la tasa de interés, se incrementaron en 1.000 puntos.

Cabe hacer una pequeña digresión en esta historia. La propiedad de un alto porcentaje de los medios de comunicación en este país está concentrada en los grandes grupos. Si esto es así, lo lógico es que salvaguardaran los intereses de sus dueños.

Falso. Falso.

Los medios vieron que este juego de revoquémonos todos a todos hasta que no quede absolutamente nada daba para fantásticos titulares y en

tre más circo más circulación. ¿Será que circulación viene de circo? Unos a otros se tildaban de ladrones. Unos a otros se tildaban de ineptos. ¡Qué viva el circo!

Mientras tanto los mercados internacionales se enloquecían. La tasa de interés implícita de los papeles colombianos que se transan en el exterior superó con creces la de los más atrasados países africanos. La consecuencia de esto fue el detrimento de los patrimonios públicos y privados. Entre más riesgo se perciba, mayor retorno van a pedir los inversionistas y la forma de obtenerlo es disminuyendo el valor de las empresas.

Para explicar esto se analizaron los grandes grupos económicos del país. Se tomaron sus márgenes operacionales del año 1997 y se dividieron por el retorno exigido por los inversionistas en ese año. Sobre decir que a mayor debilitamiento de la institucionalidad, mayor percepción de riesgo, mayor tasa de descuento y menor valor de las empresas.

Entre el año 1997 y el año 1999 los márgenes operacionales se redujeron sustancialmente al expresarlos en dólares, por efecto de la recesión y de la devaluación. Pero eso no es lo más grave. En el mismo período, las tasas de descuento a las cuales alguien estaba dispuesto a comprar empresas en Colombia se habían disparado de 12% a 20%. Eso implica que los mayores grupos económicos perdieron en ese período alrededor de US\$4 billones, que representan aproximadamente 40% de su patrimonio. Se nos volvieron pobres los ricos. De pronto, para algunos esa es la única forma de mejorar la distribución del ingreso.

Pero eso de volverse pobres pasa hasta en las mejores familias, lo extraño de este proceso es cuando la gente se vuelve pobre voluntariamente. Yo les digo, o son anarquistas

o todos se nos convirtieron en unas tardías reencarnaciones de San Francisco de Asís y le dijeron a los medios de su propiedad: ayudadme, ayudadme y libradme de todas éstas mis riquezas. De qué otra manera se explica uno que mientras que las tasas de interés de la deuda colombiana subían y subían, los medios seguían echando leña al fuego para que la institucionalidad quedara convertida en cenizas.

Más triste aún, el ingreso en dólares del colombiano promedio cayó en 30% en el mismo período. Esto, esto sí no es gracioso. Esto es pobreza de verdad. ¡Qué mal negocio ha sido el circo! ¡Qué caras nos han salido las boletas!

Pero como aquí estamos trabajando hipótesis de economía política, de pronto la razón es otra. La

La mayor debilitamiento de la institucionalidad, mayor percepción de riesgo, mayor tasa de descuento y menor valor de las empresas.

razón es que quienes trabajan en los medios, independiente de la posición social de sus dueños y los intereses que éstos representan, sí tienen conciencia social. Es más, son los últimos bastiones del PST, Troscos ortodoxos o pura Kampuchea Socialista, esos sesguitos *Khmers Rouges* del PC. Si es eso, hasta bonito sería. Infiltrado en la casa del enemigo, el periodismo colombiano mina las estructuras de la burguesía desde sus órganos reproductores. Si esto fuera cierto, el Che se nos levanta de la tumba y Daniel el Rojo coge buseta Directo Caracas.

Alcancé a emocionarme, pero el más básico análisis económico que debieron haber hecho todos nuestros perspicaces periodistas desde sus unidades investigativas prueba que la más afectada, como siempre, es la clase trabajadora de este país.

Dado que la mayor parte de las industrias colombianas están ahogadas, con dificultad pueden pagar las deudas para no ser ejecutadas. Eso quiere decir que para pagar cualquier incremento en tasas de interés los ingresos deben provenir del único costo fijo reducible que son los salarios.

El efecto de la desinstitucionalización para el momento de las revocatorias había hecho subir la tasa de interés en 6%. Como la tasa de interés interna y la externa deben igualarse, ya que de otra manera la fuga de capitales se tornaría imparable, podemos asumir que todo el efecto Animalandia también haría crecer la tasa de interés interna en 6%. Ahora, sobre la base de una deuda total, interna y externa, de US\$30.000 millones, un incremento de 6% implica un mayor pago de US\$1.800 millones por año. Asumiendo que un empleado promedio cuesta \$6 millones al año, sería necesario liquidar a 600.000 empleados para pagar

la boleta del circo que de puros desocupados nos inventamos y que los medios se encargaron de rociar con gasolina subsidiada. Sigamos con el ejercicio. 600.000 empleos directos con cuatro personas dependientes por empleado implica que el número potencial de colombianos entrando a miseria absoluta sería de 3 millones.

Definitivamente la teoría comunista de los medios no tiene ni pies ni cabeza. La de la anarco-oligarquía parece tener mucho más asidero. Un nivel de pauperización de este tamaño no lo podría diseñar ni el más malo de los malisísimos funciona-

rios del Fondo Monetario Internacional.

Bienes públicos y bienes privados

Quinto mito

El Estado debe proveerlo todo. Lo establece claramente la Constitución.

Todos un poco Rey Sol, todos un poco el Estado soy yo.

El concepto generalizado es que el Estado es responsable de absolutamente todo. El Estado debe proveer energía. El Estado debe hacer refinerías. Debe ser dueño de minas de carbón y explotarlas. Debe dar educación gratuita a todos y a todos los niveles. Debe subsidiar la construcción de vivienda. Debe garantizar una cobertura plena en salud. Debe poseer institutos de energía nuclear.

Uno podría pensar que esa racionalidad de “es el Estado, debe ser el Estado”, no tiene graves consecuencias. Es el natural acto humano de buscar solucionar necesidades insatisfechas y el agente sobre el que se puede ejercer esta presión es el Estado. Es la perpetua queja expresada en la forma en que no puede ser resuelta.

Cuando el Estado no puede proveer lo que al Estado se le pide, es que el Estado es inepto y hay que cambiarlo. Por alguien nuevo, por alguien distinto, por un antipolítico. Por no más de lo mismo. Pero a ese no más de lo mismo, que probablemente ofreció proveer lo que el anterior no había podido, se le vuelve y se le pide que el Estado provea y solucione todo. Y no puede, e incumple. Entonces lo insultamos. Le decimos que se volvió político. Pedimos su renuncia. La exigimos. Volvemos y comenzamos el ciclo.

Cuando se pide lo imposible, no se obtiene nada. Mentiras. Se obtienen votos, titulares de prensa e indignaciones. Se obtiene más hambre, más desempleo, más violencia y más argumentos para la violencia. El circo se nos convirtió en tragedia griega y ni siquiera nos dimos cuenta.

El Estado Colombiano, para sobrevivir políticamente a la agresiva y violenta solicitud, decidió responder a lo imposible con lo imposible. El Estado Colombiano decidió proveer salud, muy lógico, y ser banquero. Decidió garantizarle a través de las Fuerzas Armadas la seguridad a los ciudadanos, loable labor, y también ser compañía energética. Decidió proveer educación, completamente fundamental, y ser especulador petrolero.


Decidió ser todo y no ser nada. Una salud a medias, con los estratos sociales de menores recursos todavía descubiertos. El Estado despilfarró billones en un sector financiero público con muy poco impacto social, mientras la mortalidad infantil sigue presentando indicadores inaceptables.

Decidió ser todo y no ser nada. Unas Fuerzas Armadas en medio de uno de los conflictos de mayor magnitud en el mundo, enfrentando una guerrilla plenamente financiada, con helicópteros obsoletos y sin recursos para pagar el combustible. Qué distinta hubiese sido la arrogancia y la voluntad negociadora de la guerrilla si el dinero gastado en el sector eléctrico, con expansiones a destiempo, como son todas las hidroeléctricas recientes, se hubiera ido a fortalecer la capacidad de defensa institucional del país.

Una educación a medias, con unos maestros mal capacitados y aún peor pagados, y con mínima inserción a la tecnología, lo cual tiene un enorme costo para el futuro de los colombianos cuyo único patrimonio es la edu-

cación. Cuán diferente sería el país si los más de US\$3billones que se han gastado recientemente en subsidios a gasolina hubieran sido dedicados a formar capital humano, que es el único patrimonio del 99% de los colombianos, el generador de flujo de caja a lo largo de sus vidas, el principal factor de movilidad social en un país en donde la violencia responde a que quien nace comiendo basura tiene la certeza de que va a morir comiéndose la misma basura, o incluso un poco más.

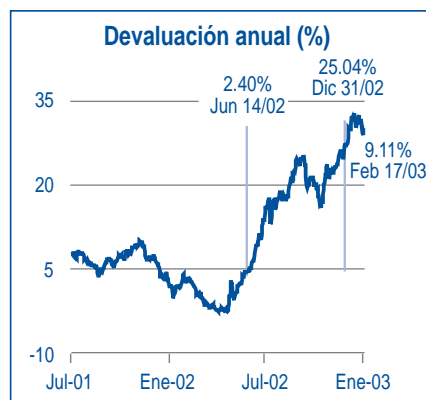
La prioridad del gasto debe ser cubrir satisfactoriamente aquello que el Estado y tan solo el Estado puede proporcionar. ¿QUÉ ES ESTRIC-TAMENTE PÚBLICO?, es una de las definiciones más antiguas que existen en economía. Aquello que genera a la sociedad externalidades que no son cobrables a cada individuo. Aquello cuyos beneficios son superiores a la capacidad o disponibilidad a pagar de los individuos. Aquello que tan solo es rentable, socialmente, cuando lo tienen todos y no cuando lo tienen unos pocos. Aquello que no puede ser proporcionado por el sector privado. Esto tiene nombres propios, muy claros: EDUCACIÓN, SALUD, JUSTICIA Y DEFENSA. Antes de que estos cuatro pilares hayan sido correcta y plenamente cubiertos, el gasto de recursos del Estado en otras áreas es un atentado contra el bienestar de la sociedad.

Lo que había detrás de la liberación de los precios de la gasolina era la concepción de costo de oportunidad y la preocupación con la desfinanciación de los derechos fundamentales, de lo que es estrictamente público y cuya prestación define a corto y a largo plazo la viabilidad de una sociedad. Puesto en términos más complejos, era el seguimiento estricto de los criterios de equidad de John Rawls, el más inteligente crítico del modelo neoclásico. 

Situación monetaria y financiera

Durante el último trimestre del año anterior y los dos primeros meses de 2003 los hechos más importantes en materia monetaria y cambiaria son la continua expansión monetaria, el posterior freno a la misma desde comienzos del año en curso, el alza en las tasas de interés del Banco de la República, el incumplimiento de la meta de inflación al finalizar 2002, un nuevo episodio de presión sobre la tasa de cambio iniciado a principios de diciembre y que la mantiene – a mediados de marzo– en los niveles más altos de la historia. Por último, la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario.

El 17 de enero el emisor decidió subir en 100 puntos básicos toda su estructura de tasas de intervención. Las



tasas mínimas y máximas de expansión quedaron en 6.25% y 10% y las mínimas y máximas de contracción en 4.25% y 5.25%. Se trata de la primera alza en las tasas de interés desde noviembre de 1998 y puso fin

a una secuencia de cinco intervenciones a la baja ocurridas durante el año anterior, que redujo las tasas en 325 puntos básicos.

En esta oportunidad no hubo mención a los indicadores de crecimiento de la actividad real. Mientras que las bajas ocurridas durante el año anterior fueron posibles porque la inflación no mostraba signos de salirse de cauce y el Banco reconocía la debilidad en el ritmo de crecimiento, en esta oportunidad la autoridad monetaria reconoció que aun con el alza en las tasas de interés éstas se encuentran en un nivel bajo e inferior a los de la mayoría de bancos centrales de América Latina. De acuerdo con el comunicado del Emisor, con la medida espera que sean controladas las expectativas de inflación y aumente la probabilidad de cumplir las

metas para 2003 y 2004 sin comprometer el proceso de reactivación económica. De manera implícita, entonces, se sugiere que son más poderosos los efectos negativos que sobre el ritmo de actividad real ejerce una inflación incluso levemente desbordada, que el que podría ejercer una estructura de tasas de interés más elevada por cuanto ésta es aún baja en términos reales.

La razón para esta decisión fue fundamentada por el Emisor en el incumplimiento de la meta puntual de inflación durante 2002, en las expectativas prevalentes sobre un aumento de la misma durante los siguientes meses, lo cual –a juicio del Banco– constituye un riesgo sobre el cumplimiento de la meta de inflación en 2003, y en la aceleración de la devaluación.

En efecto, a comienzos del último trimestre del año 2002 la inflación anual se encontraba por debajo de la meta de 6% y el Banco disponía de espacio suficiente para continuar irrigando liquidez al sistema, principalmente a través de expansiones de la base monetaria.

En septiembre, la inflación alcanzaba 5.97% y la devaluación nominal si bien era elevada, mostraba un ritmo adecuado de corrección en la tasa de cambio real, situación vista entonces como necesaria y favorable para estimular la actividad real. Recordemos que durante toda la mitad del año la depreciación nominal del peso fue muy reducida e incluso, durante el mismo lapso, registró una apreciación real anual promedio de 6.89%, lo cual desestimulaba las exportaciones. Pero a partir de octubre la situación cambió. La inflación anual se ubicó en 6.37%, presagiando que al final de año la meta establecida en 6% sería superada. De hecho, en los dos meses siguientes y últimos del año, la inflación anual para consumidores continuó en aumento hasta llegar a 7.07% en noviembre y 6.99% en diciembre de 2002.

Por su parte, durante aquel mismo período la devaluación volvió a repuntar y alcanzó en octubre el máximo nivel del año –el día 17 la TRM trepó hasta \$2.857.13, correspondiente con una depreciación nominal de 24.05% anual– y, luego de una corta corrección a la baja que apenas duró un mes, la tasa de cambio se disparó en el tramo final del año 2002, proceso que sigue hasta hoy a pesar de la reducción de

las tasas de interés ocurridas a mitad de enero pasado y la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario, ocurrida a fines de febrero. El año anterior terminó con una TRM de \$2.864.79 y una devaluación punta a punta de 25.04%. En enero 29 ascendía a \$2.965.6; al finalizar febrero había cedido de manera leve hasta \$2.956.31 y en marzo 10 –último dato– llegó a \$2.959.75 (31.7%, 28.0% y 29.6% de devaluación anual, respectivamente).

Si bien la decisión de subir las tasas de interés no encontró un terreno de consenso entre analistas y agentes del mercado –algunos la consideraron inoportuna y riesgosa desde el punto de vista de la necesaria y pendiente reanimación del ritmo de crecimiento–, los hechos muestran que, incluso, son posibles nuevos esfuerzos monetarios para contener la devaluación y su rápido traslado a los precios domésticos. Y ello es así, porque a pesar de que la inflación básica –que mide esencialmente las presiones de demanda sobre los precios domésticos– llegó a 5.6%, inferior a la meta de inflación y a la total, se registró un cambio en la tendencia decreciente que traía este indicador. Esto debe entenderse como el resultado de presiones sobre los precios a partir de factores macroeconómicos y, en este caso, tal factor es la devaluación.

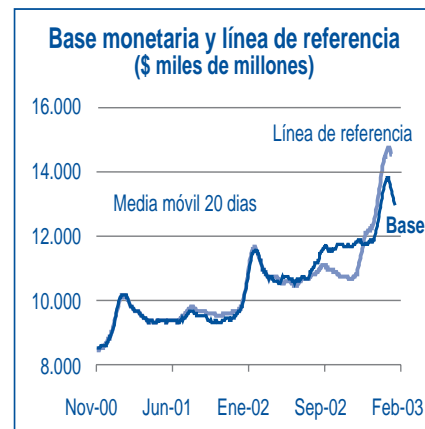
En efecto, la inflación no cedió en enero ni en febrero. En el primer mes del año, el componente básico de la inflación se ubicó en 6.3% al tiempo que los precios de la canasta total subieron 1.18% mensual, más del doble del alza registrada en el mismo mes del año anterior, con lo cual el primer dato de inflación del año corriente cifró la inflación anual en 7.4%. En febrero la inflación anual fue de 7.24%, medio punto porcentual superior a la registrada en el mismo mes del año anterior. La llamada “inflación núcleo”, en cuyo cálculo se excluyen del IPC los productos históricamente más volátiles, pasó de 6.98% en febrero de 2002 a 7.37% en el mismo mes de 2003.

A diferencia de lo ocurrido durante los dos primeros trimestres del año pasado, la devaluación –y a partir de aquí, el componente básico de la inflación– del último tramo del mismo y comienzos del actual ya no responde a la percepción de riesgo país que afectó a toda la región, asociado a la sequía de recursos externos y a las afugias fiscales locales. El riesgo ha descendido para todas las economías emergentes y, en

el caso concreto de nuestro país, se percibe que para 2003 el ajuste fiscal –al menos desde el punto de vista de las necesidades de financiamiento– garantiza que desde ese frente no provendrán las presiones cambiarias, no obstante que el adverso entorno internacional actual supone un balance en cuenta corriente más deficitario que el inicialmente esperado para el año en curso.

La aún no consolidada recuperación de la economía norteamericana y la ya declarada crisis venezolana sugieren que su impacto neto sobre el déficit de la cuenta corriente rondará los US\$ 312 por menores exportaciones hacia Estados Unidos y Venezuela, sólo compensadas en parte por un esperado aumento en el precio del petróleo y los consiguientes mayores ingresos por exportaciones de crudo. Esta modificación en las estimaciones del balance externo estarían internalizándose ya en las percepciones del mercado, de manera que responden en buena medida por los aumentos en la tasa de cambio observados desde los últimos meses del año anterior.

En este contexto, las presiones inflacionarias siguen y el Emisor ha dado señas de que se empeñará en quitar presión al mercado cambiario. La principal, además del ajuste al alza en las tasas de interés, fue el anuncio de que durante el año subastará opciones para desacumular reservas hasta por un monto de US\$1.000 millones. La primera subasta de US\$200 millones se llevó a efecto al finalizar febrero y el Banco de la República recibió ofertas del mercado por un total de US\$ 710 millones. La tasa de cambio, sin embargo, sigue en niveles muy cercanos al máximo histórico de US\$2.968 observado el 11 de febrero pasado. Así, en tanto no se disipan las expectativas de devaluación y las tasas de interés que remuneran el ahorro son muy bajas, es razonable esperar que au-



mentos adicionales de la oferta monetaria validarán tasas de cambio más altas, realimentando el proceso inflacionario de origen macroeconómico que a la fecha estamos presenciando.

Si el Banco de la República considera necesario actuar sobre sus tasas de interés –situación que vemos probable–, creemos que es bajo el riesgo de afectar la aún débil dinámica de crecimiento porque las tasas reales están aun muy bajas –ceranas a cero–; porque el impacto sobre las variables reales toma tiempo y no es automático y, en todo caso, porque los costos asociados a tasas de interés más elevadas son menores comparados con los efectos adversos de un aumento de la inflación.

Agregados monetarios

La oferta monetaria vuelve a acelerar su ritmo de crecimiento desde comienzos de año. Pero a diferencia de lo ocurrido a lo largo de casi todo el año anterior, desde el mes de noviembre el responsable de la expansión en los medios de pago más líquidos ya no es el Emisor por cuenta del crecimiento de la base. El agregado M1 crece a una tasa superior al de la base al finalizar el mes de febrero (22.9% y 16.9% respectivamente) y, dentro de este agregado, las cuentas corrientes lo hacen a tasas más enérgicas que el efectivo (24.1% y 21.6% en su orden). Esto muestra que el año comenzó con una expansión secundaria de los medios de pago: el sistema financiero está aumentando su ritmo de colocaciones. En efecto, mientras que al cierre de diciembre de 2002 el multiplicador de la base monetaria era menor en 4.9% que el registrado en el mismo período del año anterior, en la última semana de febrero este indicador aumentó 5.2%. El coeficiente de efectivo a cuentas corrientes que en diciembre aumentaba al acelerado ritmo de 11.8% anual, mostrando una creciente preferencia por la tenencia de activos en forma de efectivo, se reduce ahora 1.8%, lo cual indica que ha aumentado relativamente la preferencia por depósitos en cuentas corrientes. Esta situación nueva no deja de ser satisfactoria, porque muestra que el sistema financiero está dinamizando su actividad de intermediación, lo cual además está reflejándose sobre las utilidades totales del sistema que continúan creciendo.

Ahorro financiero

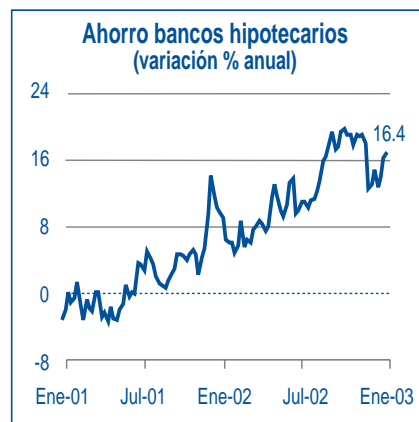
La oferta monetaria ampliada (M3) viene aumentando la velocidad de expansión desde octubre pasado. En febrero, la expansión de M3 se ubicó en 10%, mientras que cuatro meses atrás crecía



6.9% anual. Hasta mitad del año anterior, el crecimiento del agregado monetario más amplio respondía al comportamiento positivo y creciente del ahorro tradicional y de los depósitos en CDT, al tiempo que los depósitos en cuentas corrientes mostraban un tímido –pero también creciente– ritmo de expansión. Ahora, todas las formas de ahorro financiero, a excepción de los depósitos a término, están creciendo.

El ahorro en bancos comerciales sufrió una desaceleración en su ritmo de crecimiento anual desde el mes de octubre, momento en que registró la mayor expansión relativa del año anterior (40.4% anual). En diciembre, su ritmo se había moderado a 25.9% anual. No se trata de alarmas: el habitual aumento de la demanda de medios de pagos más líquidos para el fin de año explica este comportamiento estacional. De hecho, ya en enero el ritmo de crecimiento del ahorro en bancos comerciales se recupera al alcanzar 32.8%, situación que continúa en febrero (33.4%). Por su parte, si bien se expande a tasas inferiores, los depósitos de ahorro en bancos hipotecarios muestran la misma tendencia: un máximo en octubre, desaceleración durante los dos siguientes meses, y recuperación en el primer y segundo mes del año en curso. Lo significativo es, para ambas formas de ahorro, que se ha mantenido la tendencia observada durante todo el año anterior, de una sostenida recuperación del ahorro tradicional.

Los depósitos a término siguen decreciendo. Y ello se explica por las bajas tasas de interés de



captación pre-
valecientes
durante todo el
año. La DTF
prácticamente
no está remun-
erando en tér-
minos reales al
ahorro. Y ha-
biendo alter-
nativas mucho
más atractivas
rentables y lí-
quidas como lo es la compra de dólares, es obvio que los pasivos del sistema financiero representados en CDT se desplomen. Con todo, la tasa de decrecimiento de los ahorros menos líquidos ha venido disminuyendo durante el último trimestre de 2002 y comienzos del actual. Mientras en septiembre anterior los CDT en bancos comerciales, hipotecarios y en corporaciones financieras se contraían a un ritmo anual de 14.7%, 10.8% y 20.5%, al final de febrero los mismos registraron caídas de 13.9%, 6.4% y 6.5% respectivamente.

El crédito total completa seis meses consecutivos de expansión. Tras un largo período de tres años completos de permanente contracción, desde septiembre del año pasado la cartera registra un crecimiento sostenido. Al finalizar febrero las colocaciones de todo el sistema se expanden 6.1% anual.

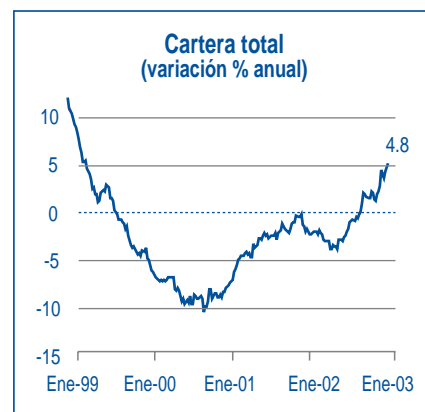
Medido en moneda constante, la cartera total –sin embargo– se mantiene en terreno negativo. El hecho positivo es que no se aleja de la tendencia observada desde hace más de un año, de reducir la velocidad de contracción real. Al finalizar febrero de 2003, el crédito total del sistema financiero reportaba una caída real de 1.1%, lo que se comprara favorablemente con los abultados niveles de contracción del orden de 12% observados un año atrás y de 20% durante el último trimestre de 2000, el momento más crítico del llamado *credit crunch*.

La disponibilidad de recursos prestables en el sistema financiero, las aún reducidas tasas de interés y la incipiente recuperación del ritmo de actividad económica auguran que de manera relativamente rápida la cartera real mostrará signos positivos de expansión.

Perspectivas

La presión sobre la tasa de cambio ha generado expectativas inflacionarias que el mercado comienza a validar. Una prueba es que el precio de los títulos de deuda denominados en UVR, esto es, protegidos de la inflación, han aumentado de manera acelerada en los últimos dos meses, al tiempo que aquéllos denominados en pesos han perdido valor. En esta perspectiva consideramos que el Banco de la República no dudará en volver a encarecer su oferta de liquidez si las presiones sobre la tasa de cambio no se disipan en el corto plazo y a acelerar sus convocatorias a subastas para desacumular reservas. Una nueva alza –menor que los 100 puntos aplicados en enero– es probable y posible si la inflación continúa reportando incrementos de los precios por encima de la meta oficial. El cambio en la posición de política monetaria por parte del Emisor es posible, porque el actual nivel de tasa de interés es muy bajo en términos reales y, al tiempo que incentiva la salida de capitales en busca de mayores rendimientos,

no parece ser un factor que en lo inmediato sea relevante para determinar el ritmo global de crecimiento de la actividad económica. Por su parte, si bien la DTF reac-



cionó al alza en diciembre y enero, refleja también un bajo nivel de incentivo al ahorro. De continuar la dinámica de las colocaciones de cartera en el sistema financiero –situación que consideramos segura–, las necesidades de fondos prestables obligarán a ofrecer tasas más atractivas para acelerar el ritmo de crecimiento de las captaciones. En estas circunstancias prevemos que el costo del dinero debe entrar en una sostenida senda al alza, moderada, y en el caso de la DTF deberá ubicarse en un nivel de 10% efectivo anual al finalizar el año en curso. **ANIF**

Una propuesta para el mercado de TES

Rodrigo Suescún*

Casi seis meses después del episodio de turbulencia en el mercado de TES, la mayoría de los analistas independientes y el mismo Banco de la República en su “Reporte de Estabilidad Financiera” (diciembre de 2002) concuerdan en señalar que el problema era transitorio y declaran que la calma ha vuelto a reinar en ese mercado. Ya que todo está bien, y a pesar de la conocida frase de que el éxito no requiere de explicaciones, quizá sea el momento de hacer algunas reflexiones sobre ese episodio.

En agosto del año pasado las autoridades cortaron la primera subasta primaria de TES del actual gobierno en niveles de precios inferiores a los que el gobierno anterior venía colocando su papel. El acervo de títulos de deuda pública en manos del sector financiero valorado a los nuevos precios de mercado implicaba el reconocimiento de pérdidas en sus balances. Este hecho puso en evidencia la vulnerabilidad del sector financiero al riesgo de tasas de interés. El mencionado informe del Banco de la República calcula que si todos esos TES (\$7.7 billones en agosto de 2002) fueran valorados a precios de mercado¹, el sector perdería cerca de \$242 mil millones por cada punto porcentual de desplazamiento en la estructu-

ra a término de tasas de interés. De esa pérdida, cerca de 90% (\$218 mil millones aproximadamente) sería de los bancos. Es decir, dado que los bancos generaron durante el año 2002 cerca de \$1.1 billones en utilidades, estos cálculos nos indican que cada punto de incremento en la tasa de interés de mercado desaparece de un plumazo 20% de las utilidades anuales del sistema bancario.

Para fortuna de todos, la turbulencia desapareció prácticamente sin tener que hacer nada. En verdad, tres cosas se han hecho. En primer lugar, el Gobierno suspendió las subastas primarias a la espera de que el problema desapareciera si los agentes percibían que ya no estaba presionando el mercado. Sin embargo, esta estrategia no era creíble. Todos sabemos que, a pesar de las reformas aprobadas, durante el año en curso el Gobierno necesita hacerle *roll-over* a \$8 billones de TES y colocar otros nuevos por \$4.6 billones. Más temprano que tarde las subastas volverían a hacer parte de nuestra vida cotidiana.

En segundo lugar, una vez reiniciadas las subastas, el Gobierno utilizó la estrategia de colocar sólo deuda de corto y de muy mediano plazo. Quizá los problemas se esfumarían si incrementos adicionales en las tasas

de interés largas no tuvieran forma de materializarse. Sin mercado no habría nuevos precios de mercado, ni tampoco pérdidas por valoración de los portafolios a precios de mercado. Consistente con esta estrategia, el Gobierno subastó pequeños montos a un plazo promedio relativamente corto. Aún así, la tendencia alcista de las últimas semanas de las tasas cortas no ha podido detenerse.

La única colocación de largo plazo significativa se dio en la subasta de papel a 12 años del pasado 20 de febrero, la cual fue adquirida con los recursos del traslado de cesantías. Esto no significa que el sector financiero haya vuelto a invertir masivamente en TES de largo plazo del gobierno, ni es indicativo de que todo está de nuevo

* Investigador de la Oficina del Economista Jefe para América Latina del Banco Mundial. Este documento es de la exclusiva responsabilidad de su autor y no compromete la opinión de la institución para la que trabaja.

¹ La Superbancaria en “Efectos de Valoración del Portafolio de Deuda Pública: julio-agosto de 2002” calcula que después de la reclasificación del portafolio de TES de que trata la Circular Externa 033 de 2002, los bancos sólo tenían a finales de agosto \$1.1 billones de TES clasificados “hasta el vencimiento”. Es decir, buena parte de portafolio de TES debe valorarse a precios de mercado.

normal. Las administradoras de cesantías no toman posición en ese papel, simplemente administran un portafolio autónomo y transfieren las fluctuaciones en los precios de los activos a los ahorradores quienes no tienen más remedio que aceptar el rendimiento que les ofrezcan o cambiar a una nueva administradora, la cual igualmente tendrá el mismo portafolio del TES y la misma rentabilidad. El mismo razonamiento aplica a las inversiones realizadas con recursos cautivos de fondos obligatorios de pensiones. Lo que sí es revelador, es que en la subasta de ese día el Gobierno entró a colocar recursos en la porción más corta de la curva de plazos con la emisión de TES B a 90 y 180 días.

Finalmente, la última estrategia utilizada ha sido la de esperar a que el Banco de la República no cambie la postura de la política monetaria y siga con aquélla de propiciar bajas tasas de interés. La idea es simple, mientras haya liquidez los precios de los activos no tenderán a caer. Sin embargo, las cosas ya no se ven tan fáciles en el futuro cercano. La tasa de inflación tocó fondo hacia mediados del año pasado y ahora está rebotando ligeramente. Algún problema deben estar viendo la autoridades monetarias en el comportamiento de la inflación si ya han aumentado sus tasas de intervención y están dispuestas a frenar el comportamiento de la tasa de cambio poniendo reservas internacionales a disposición del mercado. Vale la pena recordar que la política monetaria está montada alrededor de la estrategia de inflación objetivo. Si los pronósticos de inflación muestran que ésta va al alza, el Banco Central debe ajustar sus instrumentos para asegurar el cumplimiento de la meta de inflación.

Lo cierto es que ha vuelto a reinar la calma en el mercado de deuda pública sin necesidad de hacer prácticamente nada de fondo. El punto que desea subrayarse en este comentario es que los incentivos de los

agentes que participan en el mercado no han cambiado y que son contrapuestos, y que el mercado de deuda pública puede desenvolverse en una dirección indeseada, hacia un mercado de corto plazo.

Por un lado, el sistema financiero mostró vulnerabilidad, la sigue mostrando y lo responsable sería que se moviera en la dirección que le permita disminuir su exposición al riesgo de tasas de interés. La vulnerabilidad del sistema financiero puede evaluarse con la ayuda de una sencilla expresión:

$$r\%P = - [\text{duración}] * [ri]$$

que muestra que el cambio porcentual en el precio de los activos ($r\%P$) se mueve inversamente con el cambio en la tasa de interés (ri), y que entre mayor sea la duración del portafolio, mayor será la caída –por efecto de revaloración– en el precio de los TES cuando la tasa de interés aumenta. Si la duración promedio del portafolio de TES es de 3 años y las tasas de interés suben un punto porcentual (1%), los precios caerán en 3% = - [duración] * $[ri]$ = -3 x 1%. Si se tiene un portafolio que vale \$7.7 billones (suponiendo que todo se valora a precios de mercado), la pérdida aproximada sería de \$230 mil millones, cifra cercana a la calculada en el reporte del Banco de la República.

Si los intermediarios quieren reducir su exposición al riesgo de aumento de tasas de interés, deben reducir la duración de su portafolio. Una forma extrema de hacerlo sería vendiendo su portafolio de TES de forma tal que la duración y la exposición serían cero por definición. Esta decisión no es buena, pues si todos los intermediarios tuvieran el mismo comportamiento el precio de mercado de los bonos caería e incurrirían en la pérdida que estaban tratando de evitar. Otras formas menos extremas de reducir la duración de un portafolio

es recomponiéndolo hacia el corto plazo, comprando TES de más corta maduración (y tratando de vender los de más largo plazo –que son los más sensibles al aumento de tasas– o dejar que pase el tiempo, con lo que la vida media del portafolio cae) y/o exigiendo mayores tasas de interés. Ya que el aumento de tasas de interés en títulos de largo plazo no ha podido materializarse debido a que han sido escasas las subastas de largo plazo, la única opción abierta es la de comprar TES de corta maduración y requerir mayores tasas de interés sobre ellas. Esto explica por qué le es tan difícil a la Tesorería vender títulos de largo plazo (a no ser que sean recursos de cesantías y pensiones o entidades públicas), hacer que el sistema financiero aumente su posición en TES y evitar que aumenten las tasas de interés cortas.

El Gobierno, por el contrario, tiene incentivos diametralmente opuestos. Al Gobierno le interesa tener en circulación un saldo de TES con una larga vida al vencimiento. Una razón es que de esta forma se disminuye la sensibilidad del costo promedio de servir su deuda a cambios en las tasas de interés de mercado. Si por alguna razón la postura de la política monetaria se vuelve más contraccionista y la deuda en circulación es de muy corto plazo, muy rápidamente el aumento en las tasas de intervención se transmitirá a la totalidad del servicio de la deuda pública. La otra razón es que de esa forma se disminuye el riesgo de *roll-over*. Si la maduración de la deuda estuviera concentrada en el muy corto plazo, dado su tamaño, el Gobierno tendría que acudir repetidamente al mercado para hacer *roll-over* de montos muy importantes, lo que llevaría eventualmente a una crisis de financiamiento. Desafortunadamente, una cosa es lo que le interesa al gobierno y otra lo que le interesa al mercado. Hasta ahora lo que la Tesorería ha podido hacer es colocar

deuda de corto plazo para minimizar el costo del servicio.

El Banco de la República, por su parte, tiene la independencia legal para ajustar los instrumentos de política monetaria con el propósito de alcanzar la meta de inflación. Sin embargo, la independencia para ejercer esas funciones está hoy fuertemente limitada. El Banco sabe que por cada punto de elevación de la tasa de interés desaparecerá 20% de las utilidades del sector bancario y con ello la liquidez del mercado de deuda pública y la posibilidad del gobierno de colocar nueva deuda y financiarse en términos razonables. De la misma manera, de seguir colocando sólo deuda de corto plazo, en un futuro cercano el efecto de mayores tasas de intervención se trasladará rápidamente al servicio total de la deuda pública con el consiguiente costo en términos de mayor déficit fiscal y mayores necesidades de financiación. El Banco de la República tiene la independencia formal para actuar, pero la ejecución de políticas contraccionistas tendría costosas consecuencias sobre el sistema financiero, el mercado de deuda pública y las finanzas públicas. Al Banco Central le convendría que el sistema financiero no estuviera expuesto al riesgo de tasas de interés y que la deuda pública en circulación fuera de largo plazo para no tener que golpear ni al uno ni al otro en caso de cambiar la postura de política.

Una propuesta de manejo de la deuda pública interna

Después de las reformas que ha introducido la actual administración y mientras los mercados evalúan el verdadero alcance del compromiso del gobierno con el proceso de consolidación de las finanzas públicas, los inversionistas y el Gobierno se encuentran en medio de un juego no cooperativo en el que unos y otros tienen intereses contrapuestos. ¿Qué

hacer? ¿Cómo colocar deuda de largo plazo pero que no resulte tan costosa?

La deuda pública interna en manos del sector privado ha crecido tan rápidamente en el pasado (\$3.4 billones en 1999, \$5.9 billones en 2000, \$6.9 billones en 2001, \$10.2 billones en 2002) que el reciente ajuste fiscal no ha sido suficiente para evitar que el gobierno deje de sustraerle recursos nuevos al sector privado (\$4.6 billones para este año) y menos aún, para disminuir las necesidades de refinanciación. Mientras se materializan los beneficios de largo plazo de las reformas, el Gobierno tendrá que recurrir al mercado en los años por venir, pero sería muy peligroso, como hemos argumentado, seguir con lo que se ha venido haciendo: emitiendo deuda de corto plazo porque la de largo resulta muy cara.

Una alternativa sería la de emitir deuda atada a la tasa de interés de mercado (*floaters*). En este caso, cambios en las tasas de mercado no tendrían efecto en la valoración de estos activos, de modo que el sistema financiero podría aumentar la duración de su portafolio sin incrementar su exposición al riesgo de tasas de interés. El inconveniente de la deuda indexada a la tasa de interés de mercado radica en que cambios en las tasas de intervención del Banco de la República se reflejan muy rápidamente en el servicio de la deuda pública.

Una alternativa más viable sería la de incorporar en algunos TES la opción de que el tenedor tenga el derecho, pero no la obligación, de redimir el bono en una fecha predeterminada antes de la fecha de maduración. Esto es lo que se conoce como una *European put option* (o como *retractable/extendible bonds* en el Reino Unido) y ha sido muy utilizada en países que, como Italia, han encontrado igualmente difícil la colocación de deuda pública de largo plazo en períodos de consolidación fiscal.

El sector financiero estaría interesado en invertir en este tipo de instru-

mentos debido a que la opción *put* hace que la duración de la deuda sea más corta que la maduración del título. Deuda con una opción *put* incorporada se emite normalmente a plazos largos. En consecuencia, los intermediarios estarían comprando deuda de largo plazo pero sin aumentar proporcionalmente la exposición al riesgo de tasas de interés debido a que la duración del título es menor. Por la misma razón, los inversionistas no exigirían la prima que están demandando por comprar papel gubernamental de largo plazo, lo cual iría en beneficio de las finanzas públicas. El Gobierno estaría minimizando los riesgos de tasas de interés y de refinanciamiento, así como lograría colocar deuda de largo plazo a un costo más bajo. El Banco de la República estaría más tranquilo en caso de adelantar una política más contraccionista. Un incremento en las tasas de interés no le daría tan duro a la valoración de los TES en poder de los intermediarios financieros ni a las finanzas públicas.

Si las autoridades están en lo correcto, en cuanto a que la demanda actual de mayores tasas de retorno sobre la deuda pública es transitoria, y que tales presiones cederán a medida que los agentes entiendan el compromiso del gobierno con el ajuste fiscal y los frutos de las reformas comiencen a verse, las opciones *put* seguramente no se ejercerán.

Un informe reciente del FMI ("Global Stability Report", marzo de 2002) analiza cómo varios países han tenido que acudir al uso de diversos instrumentos financieros en los mercados de deuda soberana con el propósito de reducir precisamente los costos de endeudamiento y aumentar el período de maduración de la deuda. Aquí sólo se menciona una de muchas alternativas. Ojalá nuestras autoridades tengan la creatividad que han tenido varios países emergentes para enfrentar estos problemas. 

ESTOS CINCO ARTÍCULOS ELABORADOS POR
RODRIGO BOTERO MONTOYA¹ FUERON PUBLICADOS INICIALMENTE EN EL COLOMBIANO

Proteccionismo contra exportaciones*



Los aranceles
constituyen
un gravamen a las
exportaciones. Para
que no se piense que
ha habido un *lapsus
calami*, repito la
frase: los aranceles
constituyen un
gravamen a las
exportaciones.

Esta formulación no es ninguna novedad para economistas profesionales. Es un axioma de la teoría de comercio internacional. Pero es contra-intuitiva para los no economistas, incluidos algunos empresarios exportadores. Y, por supuesto, es anatema para quienes opinan sobre temas económicos a la bulla de los cocos, o para favorecer determinados intereses gremiales o políticos.

De esa premisa se derivan dos afirmaciones cuya validez puede comprobarse empíricamente:

- 1) Mientras más altos sean los aranceles de un país, mayor será la dificultad para incrementar y diversificar sus exportaciones.
- 2) A la inversa, una política comercial de aranceles bajos y uniformes contribuye eficazmente a promover el dinamismo exportador, tanto por el incremento como por la diversificación de las ventas al mercado externo.

El proteccionismo perjudica a las exportaciones de diversas maneras. La más directa es a través del encarecimiento de los insumos. Obligar a los industriales a absorber insumos nacionales caros y de mala calidad equivale a cerrarles el mercado internacional, enfrentándolos en desventaja a competidores que pueden ad-

quirir sus insumos donde se ofrezcan de mejor calidad y a más bajo precio.

Quienes formulan la política económica de un país tienen necesariamente que escoger entre los intereses del sector primario y los del sector de exportación de bienes y servicios con un alto valor agregado. Así por ejemplo, la administración Bush decidió rectificar la medida proteccionista al acero, adoptada con fines electorales, al comprobar que con ella estaba causándole daño al sector metal-mecánico y por consiguiente a la industria automotriz, al encarecerle sus insumos.

El proteccionismo también perjudica a las exportaciones vía el efecto perverso que tiene sobre los incentivos al sector privado. Los aranceles altos, o peor aún, las licencias de importación constituyen una poderosa señal gubernamental a favor de la sustitución de importaciones como objetivo prioritario de la política económica. Lógicamente los empresarios responden a esos incentivos y el sector manufacturero adquiere así un

¹ Rodrigo Botero Montoya. Fue uno de los fundadores de Fedesarrollo; consejero económico en la administración Lleras Restrepo y ministro de Hacienda en la administración López Michelsen.

* Este artículo fue publicado en El Colombiano el 3 de octubre de 2002.

sesgo en favor del mercado doméstico, pequeño pero cautivo, donde no es necesario preocuparse demasiado por la productividad. Las utilidades empresariales se obtienen en las antecelas ministeriales, gestionando incrementos de aranceles, no en la planta de producción, reduciendo costos e incorporando nueva tecnología. Es un esquema que en el agregado produce estancamiento económico y obsolescencia industrial.

Adicionalmente, los altos aranceles, al estimular una tasa de cambio sobrevaluada, permiten compensar artificialmente el desequilibrio en la balanza comercial, restringiendo el volumen de las importaciones, pero restringiendo al mismo tiempo el potencial exportador del país. De esa manera se cierra la economía al reducir la importancia relativa del sector externo.


El argumento más poderoso en favor de una mayor participación en el comercio internacional (de una economía más abierta, menos proteccio-

nista) es la contribución al crecimiento, a la generación de empleo y al nivel de bienestar general de la población. Los casos de China y de India son ilustrativos, por ser países que sólo recientemente optaron por abrir sus respectivas economías al comercio internacional. Ambos países lograron incrementar notablemente la tasa de crecimiento económico, aumentar el empleo y sacar de la pobreza extrema a centenares de millones de personas.

En este hemisferio, Chile, con la economía más abierta de Suramérica, logró mantener una tasa de crecimiento promedio de 7% anual durante la década del noventa. Con una limitadísima protección arancelaria, Chile espera obtener este año un superávit comercial de US\$2.400 millones, con base a exportaciones totales de US\$19.000 millones, cifra que supera en 50% al total de las exportaciones de Colombia. Además de un acuerdo de libre comercio ya firmado con la Unión Europea, Chile está próximo a

concluir un acuerdo similar con Estados Unidos. Su reconocido éxito económico le ha permitido proponerse la meta de alcanzar la categoría de país desarrollado en el año 2010.

Quienes prefieren atribuirle el problema de endeudamiento externo a la apertura comercial y no al déficit fiscal harían bien en explicar por qué la economía más abierta de la región tiene apenas una deuda pública externa equivalente a 10% del PIB, y por qué Chile es el único país suramericano cuyos bonos soberanos tienen grado de inversión en los mercados internacionales de capital. Ejemplos similares de apertura comercial exitosa pueden citarse no sólo en el Sudeste Asiático, sino también en Irlanda y la Península Ibérica.

En síntesis, la opción proteccionista y la opción de dinamismo exportador son incompatibles. La política económica de conjunto tiene que escoger entre la postura comercial que trata de perpetuar el pasado y aquella que le apuesta decididamente al futuro. 

Grupo Andino:

*Requiescat in Pace**

Respetuosamente someto a consideración de los presidentes andinos una propuesta modesta, pero eminentemente práctica. Declaren en la próxima reunión de Jefes de Estado, que al completar 35 años de existencia la integración subregional andina ha cumplido en forma tan exitosa su propósito central que el experimento puede darse por concluido, para dar paso a la integración económica a escala hemisférica. Luego del intercambio de condecoraciones de rigor, y de suscribir la respectiva acta de defunción, podría emitirse un so-

lemne comunicado conjunto, dándole sepultura decorosa a la Comunidad Andina de Naciones, CAN.

Es poco probable que esta sugerencia sea acogida con entusiasmo por las cancillerías de la región, y menos aún por la Secretaría de la CAN en Lima. Pero no pocos de los responsables de la política económica y los expertos en comercio internacional de los países andinos celebrarían, *in pectore*, el desenlace mencionado, así no consideren políticamente prudente manifestarlo en público.

Antes que lluevan las consabidas ex comuniones por heterodoxia y falta de solidaridad regional y las acusaciones de chauvinismo, me permito incurrir en la inmodestia de utilizar la primera persona del singular, para poner de presente los antecedentes integracionistas de quien estas líneas escribe.

Al inicio de mi carrera profesional promoví el ingreso de Colombia a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, formalizada

* Este artículo fue publicado en El Colombiano el 14 de noviembre de 2002.

en el Tratado de Montevideo. Como correctivo a las deficiencias de la ALALC, dada la heterogeneidad económica de los países miembros, propuse luego la formación de agrupaciones subregionales como paso intermedio para acelerar la integración latinoamericana, (ver *La Comunidad Económica Caribe-Andina*, Rodrigo Botero, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1967.) Posteriormente gestioné el ingreso de Colombia al Banco de Desarrollo del Caribe, para contribuir conjuntamente con Canadá, México y Venezuela al desarrollo de los países angloparlantes de la Comunidad Económica del Caribe. Si bien en su momento la propuesta de integración subregional andina fue considerada heterodoxa, el chauvinismo no es uno de mis múltiples defectos.

La idea de la integración subregional fue presentada como una etapa intermedia y no como objetivo final y permanente. Ciertamente no fue concebida como un matrimonio católico, ni mucho menos como el germen de la eventual República Bolivariana con la cual sueña el comandante Hugo Chávez.

Conviene recordar las condiciones políticas que favorecieron el lanzamiento de la iniciativa subregional andina al inicio de la administración Lleras Restrepo en Colombia. Fue relativamente fácil lograr un entendimiento con los gobiernos reformistas que dirigían Raúl Leoni (Acción Democrática) en Venezuela, Fernando Belaunde (Acción Popular) en Perú y Eduardo Frei (Democracia Cristiana) en Chile. Además de las coincidencias intelectuales y la amistad personal entre los presidentes, existía el explicable deseo de fortalecer los vínculos de todo orden entre un grupo de países democráticos, marcando distancia con las dictaduras militares suramericanas de esa época.

Esa homogeneidad política fue de corta duración, luego de la adhesión de Bolivia al Grupo Andino, el surgi-

miento en Perú de un régimen de facto de inspiración castrense seudo-revolucionaria y la elección de un gobierno socialista en Chile, derrocado a su vez por un golpe militar y reemplazado por la dictadura de derecha que retiró a Chile del acuerdo subregional.

La radicalización política de varios de los gobiernos andinos se reflejó en la orientación de la Secretaría del grupo subregional en Lima. Hubo períodos durante los cuales los funcionarios del Acuerdo de Cartagena parecían asignarle mayor prio-

**No tendría sentido,
ni comercial ni adminis-
trativo, que los países
andinos terminaran con
tres estructuras
arancelarias diferentes:
una para la subregión,
otra para los países del
ALCA y una tercera para
el resto del mundo.**


ridad a promover determinada ideología que a impulsar el comercio recíproco. En el transcurso de esas vicisitudes, y de los traumatismos políticos subsiguientes, los gobiernos que lograron preservar cierta continuidad en su manejo económico tuvieron no pocas veces que desplegar esfuerzos para minimizar los disparates originados en el entusiasmo dirigista que predominaba en la sede del acuerdo subregional.

Ha corrido mucha agua bajo los puentes desde 1967. El mundo ha cambiado en estos 35 años. Las circunstancias que condujeron a reducir tímidamente el proteccionismo arancelario sólo a nivel subregional han desaparecido. Venezuela ha dejado de ser uno de los países cuya pre-

decible estabilidad política garantizaba cierta coherencia económica, así como la validez de los compromisos adquiridos, tanto a nivel bilateral como multilateral.

Como contraprestación a las preferencias arancelarias andinas por parte de Estados Unidos, cuatro países andinos se han comprometido a negociar su ingreso al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, no más tarde del año 2005. Con la puesta en vigencia del ALCA, el Grupo Andino habrá perdido su razón de ser. No tendría sentido, ni comercial ni administrativo, que los países andinos terminaran con tres estructuras arancelarias diferentes: una para la subregión, otra para los países del ALCA y una tercera para el resto del mundo.

Adicionalmente, tanto Bolivia como Perú han manifestado su deseo de iniciar negociaciones para lograr un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, similar al que está gestionando Chile. Ese es el encargo que tiene el nuevo embajador de Perú en Washington, el ex primer ministro Roberto Dañino. Tanto para Bolivia como para Perú, el mercado norteamericano es mucho más importante que el mercado andino o el del resto de América Latina. Para todos y cada uno de los países andinos se abre desde ya una perspectiva comercial más amplia y más prometedora que la de la subregión andina.

Los cinco gobiernos andinos pueden congratularse mutuamente y clausurar de manera amistosa la etapa de la integración subregional. Habiendo estado presente en su nacimiento, y con la escasa autoridad residual que puede conceder la paternidad intelectual de la criatura, considero que ha llegado el momento para declarar, parafraseando la fórmula que anunciaba la defunción de los monarcas absolutos: el Grupo Andino ha muerto. ¡Viva la integración hemisférica! 

Aranceles, impuestos y mitos*

“¿Qué contiene un nombre? Aquello que designamos una rosa, bajo cualquier otro nombre tendría la misma suave fragancia... Romeo, despójate de tu nombre, y a cambio de ese nombre que no hace parte de tí, tómame a mí.”

Así reacciona Julieta al descubrir que su amado pertenece a la familia enemiga de su casa paterna, hallazgo que articula la trama de la pieza inmortal de Shakespeare.

Los nombres que se le asignan a los objetos y a los fenómenos tienen consecuencias en la vida práctica y en la percepción colectiva de los mismos. La terminología adoptada para presentar ante la opinión pública un tema controversial de política económica puede determinar la forma en que se desarrolle el debate y sesgar de antemano su resultado.

Supongamos que un funcionario propone establecer un impuesto al consumo, cuyo efecto sería duplicar el precio del pan, las pastas y la harina de trigo. El impuesto sería de carácter permanente y general. Se cobraría sin excepción alguna en consideración al estrato social de los consumidores, o por su impacto sobre hospitales, orfanatos, guarderías infantiles, almuerzos escolares o asilos de ancianos. Además, se estipu-

En América Latina
estos debates no se
plantean de frente
como diferencias
de intereses, sino
que se camuflan
bajo una neblina
ideológica.

laría que parte de los recursos así recaudados serían destinados a subsidiar en forma indiscriminada a los propietarios de predios rurales: pequeños, medianos y grandes.

Es fácil imaginar el rechazo indignado que recibiría semejante ini-

ciativa por parte de los partidos políticos, los sindicatos y los analistas. No darían abasto las páginas editoriales, los púlpitos, los medios audiovisuales y las intervenciones parlamentarias para denunciar a su autor, pedir su destitución y someterlo al escarnio público. Abundarían las censuras al gobierno por su falta de sensibilidad social.

Ahora bien, supongamos que esa misma iniciativa la propone otro funcionario, pero asignándole nombres distintos a los mecanismos perversos denunciados en la hipótesis anterior. En vez de impuesto al consumo, se pronunciaría la palabra mágica: ‘arancel.’ El encarecimiento de los alimentos y el consecuente

* Este artículo fue publicado en El Colombiano el 12 de diciembre de 2002.

empobrecimiento de la población se soslayarían con el término: 'protección'. Y el carácter escandalosamente regresivo del esquema, extraerle recursos a la canasta familiar para elevar las rentas de los propietarios de tierras, se disfrazaría invocando el mito de la 'seguridad alimentaria'.

Este truco de prestidigitación verbal invierte los términos del debate. El esquema anterior (designando al impuesto por su nombre), que había sido merecedor del repudio unánime, se convierte, gracias al subterfugio y a la mistificación, en un programa digno de aplauso. La aplicación de una dosis apropiada de retórica nacionalista sirve como distracción para obviar la necesidad de cuantificar el costo de lo que se propone y disimular su impacto redistributivo. El autor de la propuesta aparece entonces como el defensor de los intereses nacionales. En cambio, quienes esgrimen argumentos de racionalidad económica y de equidad social para oponerse al encarecimiento de los alimentos quedan sindicados de antipatriotas o de responder a móviles inconfesables.

La paradoja descrita no constituye un ejercicio semántico, ni describe divagaciones imaginarias en la ínsula Barataria. *Mutatis mutandi*, este debate tuvo lugar en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX y enfrentó públicamente a los voceros de la aristocracia terrateniente, partidaria de los aranceles al trigo, y a los representantes de la burguesía empresarial, la clase media urbana y la clase obrera que favorecían la libre importación de cereales. El triunfo de estos últimos (*The Repeal*

of the Corn Laws) marcó la escogencia de una opción determinada para la economía británica. Las manufacturas y la participación decidida en el comercio internacional convirtieron al Reino Unido en una potencia industrial y financiera de primera magnitud. La decisión gubernamental de liberar la importación de cereales fue acertada, tanto en términos económicos como sociales. En el contexto británico, el

La travesura bucólica en Lima se frustró en el momento en que los gobiernos beneficiarios del ATPA tuvieron que escoger entre las preferencias comerciales en Estados Unidos y el incremento desmesurado de los aranceles agropecuarios.

debate se entendió como un conflicto de intereses entre distintas clases sociales, que sólo podía dirimirse políticamente en la Cámara de los Comunes.

En América Latina estos debates no se plantean de frente como diferencias de intereses, sino que se camuflan bajo una neblina ideológica. Eso permite quitarle transparencia a la discusión, sustraerla del debate público y dirimir el conflicto en forma unilateral, a puerta cerrada. Eso es lo que intentaron hacer recientemente los ministros de Agricultura de los países andinos en Lima durante la negociación para acordar el Arancel Externo Común.


A diferencia de los gobernantes británicos, estos funcionarios optaron por los intereses gremiales a ex-

pensas del bienestar de los consumidores. Pero han encontrado la terminología adecuada para mistificar su determinación y presentarla como una medida progresista.

Es un lamentable indicio de subdesarrollo intelectual y de confusión ideológica que líderes sindicales y dirigentes políticos latinoamericanos que se consideran de extrema izquierda estén acogiendo como bandera nacionalista la plataforma reaccionaria de la aristocracia feudal europea del Antiguo Régimen: encarecer el pan para favorecer a los terratenientes.

La travesura bucólica en Lima se frustró en el momento en que los gobiernos beneficiarios del ATPA tuvieron que escoger entre las preferencias comerciales en Estados Unidos y el incremento desmesurado de los aranceles agropecuarios. La política de comercio exterior forma parte integral de la política económica de conjunto, y como tal debe conducirse.

Quienes se opusieron al atropello proteccionista andino estaban del lado de los ángeles, abogando a la vez por la asignación eficiente de recursos y por la defensa del ingreso familiar de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El diseño de la estructura arancelaria lleva implícita la fijación de políticas de largo plazo en materia económica, social y de relaciones internacionales. Es, por lo tanto, una decisión de alto gobierno que no conviene delegarle a los funcionarios del sector agropecuario. Parafraseando al 'Tigre' Clemenceau, el manejo del comercio internacional es demasiado importante para dejárselo a los ministros de Agricultura. 

Altibajos comerciales*

Durante los años noventa Perú dio un viraje en su política comercial. Abandonó el esquema de industrialización para sustituir importaciones y orientó su economía hacia el mercado mundial. De un arancel con 54 tarifas diferentes se pasó a un arancel uniforme, con una tarifa de 12% para algo más de 85% de las posiciones; las demás quedaron con una tarifa arancelaria de 20%. Como era predecible, este cambio de modelo indujo a una recomposición de la estructura industrial peruana. En el año 2000 la participación de la industria en el producto interno bruto era similar a la que existía en 1990. Varias ramas de la actividad industrial registraron un crecimiento vigoroso durante la década; otras se marchitaron. 23 sectores crecieron a tasas anuales entre 10% y 21%; 16 sectores crecieron a tasas anuales entre 0% y 10%. Los 13 sectores restantes retrocedieron. Al final de este proceso, Perú tenía una estructura industrial más eficiente, más competitiva internacionalmente.

Los sectores que se fortalecieron fueron aquellos con posibilidades no sólo de sobrevivir, sino de prosperar en los mercados mundiales. El sector textil se convirtió en el cuarto renglón de exportación de Perú, después del oro, el cobre y la harina de pescado. Los sectores que retrocedieron, como las ensambladoras de televisión y de electrodomésticos, eran ineficientes, tenían bajo valor

agregado, altos costos y mínimo potencial exportador.

Estos datos provienen de la investigación efectuada por Roberto Abusada, experto en comercio internacional, vinculado al Instituto Peruano de Economía, IPE. El documento tiene por objetivo ilustrar el retroceso que implican los cambios introducidos a la política comercial por presiones proteccionistas domésticas y por las concesiones hechas durante la negociación del arancel externo común de la Comunidad Andina de Naciones, CAN.

De acuerdo a los estimativos del IPE, como resultado de esa negociación Perú terminaría con cinco tarifas arancelarias (0%, 5%, 10%, 15% y 20%) y habría aceptado elevar en dos tercios el nivel de protección para 1.500 posiciones, de 12% a 20%. Habría aceptado incrementos arancelarios para insumos y bienes de capital producidos en otros países de la subregión, en perjuicio de las empresas peruanas, que perderían el acceso a fuentes de suministro más eficientes, en detrimento de las exportaciones de manufacturas.

El esfuerzo de una década por modificar la estructura industrial peruana, para hacerla más eficiente y prepararla para la competencia internacional, se estaría echando por la borda para regresar al esquema cepalino de sustitución de importaciones. A diferencia de lo que ocurría con ese esquema a escala nacional,

donde la ineficiencia se traducía en transferencias de ingreso entre consumidores y productores de un mismo país, en la versión actual se propone que las transferencias se hagan de los consumidores de unos países a productores de otros países. Es poco probable que ese arreglo resulte viable, así los cancilleres andinos y los ex diplomáticos que dirigen la CAN lo hayan aprobado.

De ponerse en ejecución lo acordado, Perú y varios otros países andinos habrían dado reversa en el proceso de adecuar sus economías a una mayor participación en el comercio mundial. En la práctica, se estaría renunciando a la posibilidad de negociar el ingreso al ALCA en el año 2005, una de las condiciones estipuladas para lograr las preferencias arancelarias en Estados Unidos por parte de los países beneficiarios del ATPA. Además, tanto Perú como Bolivia y Colombia perderían la opción de iniciar negociaciones con Estados Unidos para alcanzar acuerdos bilaterales de libre comercio, similares al que acaba de concluir Chile.

Los sectores proteccionistas habrían obtenido así una formidable victoria, tanto comercial como diplomática. La victoria sería más espectacular aún ya que se habría logrado a espaldas de la opinión pública, haciendo caso omiso de criterios técnicos, en una

* Este artículo fue publicado en El Colombiano el 9 de enero de 2003.

emboscada burocrática coordinada por funcionarios de la CAN y apoyada por las cancillerías andinas. Está por verse si, en efecto, se ganó por subterfugio una batalla decisiva, o si se trata de un triunfo pírrico similar al que obtuvieron los ministros de Agricultura andinos en relación con los aranceles agropecuarios.

Mejor que especular acerca de la eventual aceptación de este acuerdo por parte de exportadores, consumidores y responsables de la política económica en la subregión, resulta útil analizar las circunstancias que produjeron este despliegue de folclor andino.


Los sectores industriales que se marchitaron en Perú y en otros países con la apertura comercial son actividades parasitarias, plantas de inviernadero que sólo subsisten a la sombra de una protección elevada y permanente. Los molinos de arancel implican un desperdicio de recursos. Reducen el bienestar de la comunidad, gravando al consumidor en beneficio

de unos pocos. Lejos de generar riqueza nacional, estas empresas artificiales son una fuente de rentas no productivas para quienes obtienen del gobierno el privilegio de explotar el monopolio respectivo. En vez de contribuir al desarrollo económico, lo retardan.

Pero estos monopolios, al igual que las concesiones que otorgaban los reyes a sus favoritos para cobrar peajes en puentes y cruces de caminos, producen rentas cuantiosas para sus usufructuarios. Por ese motivo, no suelen marchitarse en silencio. Sus propietarios tienen amplio acceso a los medios de comunicación. Habida cuenta de la forma como se financian las campañas electorales, tienen influencia política. Así lo demuestra el episodio reciente en la CAN, que podría denominarse el Retorno de los Parásitos.

Sean cuales fueren los procedimientos protocolarios de la Comisión que adopta las decisiones de la CAN,

la modificación del modelo de desarrollo de los países andinos no puede delegarse en unas cancillerías que se caracterizan por su conmovedora inocencia en materia económica. Tampoco puede hacerse ese cambio a escondidas, de espaldas a la opinión pública. Los gobiernos que hayan resuelto cerrar la economía deben hacer explícita esa decisión y someterla a debate público.

Los centros de investigación de la subregión harían bien en imitar al Instituto Peruano de Economía, cuantificando las implicaciones de lo que en forma alegre está acordándose a puerta cerrada. Asimismo, tanto los ministerios del área económica como los bancos centrales deberían fijar una posición clara al respecto. Del resultado de ese debate dependen las posibilidades de convertir al comercio internacional en un motor de crecimiento, de generación de empleo y de mejoramiento del nivel de bienestar de la población. 

Paradojas comerciales*

Las aventuras de Robinson Crusoe, la novela de Daniel Defoe que ha sido el deleite literario de tantos adolescentes, suele utilizarse como recurso didáctico en las clases de comercio internacional. Se hace referencia al marinero británico sobreviviendo en su isla con la ayuda de unas pocas herramientas y semillas rescatadas del barco en el cual naufragó. Construye una choza, siembra unas verduras, pesca y produce su propio vestuario. A un nivel primitivo y con gran esfuerzo, es autosuficiente. En terminología técnica se diría que en ese estado, Crusoe

organiza, por fuerza mayor, una economía autárquica; consume lo que produce sin participar en el comercio internacional.

Luego, haciendo caso omiso de la trama original, se describe el hallazgo imaginario por Crusoe, en una isla vecina, de otro naufrago en condiciones similares, del cual se hace amigo. Este segundo naufrago ha logrado domesticar unas ovejas cuya lana utiliza para producir su ropa, al tiempo que cultiva un huerto y hace las demás labores requeridas para su propia autosuficiencia. Un buen día le hace a Crusoe la siguiente pro-

puesta: “su isla es fértil, pero observo que su ropa deja bastante qué desear. A mí, en cambio, me gusta pastorear, por lo cual descuido mi huerto. Si usted produce más verduras, yo podría producir más ropa y nos repartiríamos los excedentes respectivos. Cada uno hace lo que sabe hacer bien y los dos nos beneficiamos. De esa manera nos quedaría más tiempo libre para ir a la playa o escribir poesía”.

* Este artículo fue publicado en El Colombiano el 20 de febrero de 2003.

En la hipótesis de que Crusoe aceptara la propuesta, surgirían en forma esquemática los rudimentos del comercio internacional: especialización, ventaja comparativa, precios relativos y términos de intercambio. A este modelo elemental se le pueden añadir refinamientos adicionales: haciendo aparecer un tercer náufrago; introduciendo cambios tecnológicos, costos de transporte y dinero.

Para los propósitos presentes, el esquema sencillo de Crusoe intercambiando hortalizas por ropa con el náufrago pastoril sirve para ilustrar percepciones diferentes del comercio internacional: la económica y la política. El consenso profesional contemporáneo es que tanto Crusoe como su vecino se benefician al sustituir el esquema autárquico por uno de interdependencia con comercio recíproco. El beneficio para ambos consiste en la elevación del nivel de vida que produce la especialización. En este caso, en ausencia de dinero, el incremento del bienestar se obtiene en forma de mayores posibilidades de recreación o de consumo de bienes culturales. La especialización aumenta la prosperidad de las dos islas al permitir el uso más eficiente de los recursos de cada una de ellas. Este es el argumento económico. Al mismo tiempo, eleva el bienestar de sus dos habitantes. Este es el argumento social. Aun en la hipótesis de que Crusoe fuera no sólo mejor agricultor, sino también mejor sastre que su vecino, el comercio conllevaría beneficios para ambos.

A grandes rasgos, ésta es la justificación del libre comercio, aceptada por la profesión a partir de *La riqueza de las naciones* de Adam Smith y los aportes de los economistas franceses del siglo XVIII. Sin

embargo, de ese consenso no participan amplios sectores de la clase política latinoamericana. Paul Samuelson se refiere al concepto económico de ventaja comparativa como uno de los más contra-intuitivos para la opinión pública en general. Esto conduce a un diálogo de sordos. Los políticos consideran que los argumentos económicos a favor de la libertad de comercio son tecnicismos utópicos. Los economistas a su turno escuchan con resignación los discursos proteccionistas de los políticos, pensando para sus adentros, *¡O sancta simplicitas!*

A grandes rasgos, ésta es la justificación del libre comercio, aceptada por la profesión a partir de *La riqueza de las naciones* de Adam Smith y los aportes de los economistas franceses del siglo XVIII. Sin embargo, de ese consenso no participan amplios sectores de la clase política latinoamericana.

Para ilustrar las razones de esa dicotomía y las diferencias de mentalidad que la producen, regresemos a la isla de Crusoe en el momento en que éste medita acerca de la conveniencia de aceptar la propuesta de intercambio comercial que le ha hecho su vecino. Las premisas que sustentan el convencimiento de un economista de que debería hacerlo son las siguientes:


1. Los dos náufragos son amigos. Ninguno de los dos tiene la intención de exterminar al otro o de hacerle daño.

2. Ambos son racionales y tratan de optimizar su bienestar material.

Ninguno de los dos es asceta, ni tiene restricciones religiosas o ideológicas que conduzcan a preferir la pobreza y despreciar la prosperidad.

3. Ambos optimizarían en su doble condición. Como productores, tratarían de producir el mayor número de bienes con el menor esfuerzo. Como consumidores, procurarían obtener los bienes “importados” al más bajo precio (entregándole la menor cuantía posible de “exportaciones” a la isla vecina), maximizando así el tiempo disponible para la playa y la poesía.

Para los voceros intelectuales de determinada mentalidad latinoamericana estas premisas revelan un sospechoso sesgo anglosajón, burgués y protestante. Alcanzan a adivinar, en la propensión a comerciar, las semillas del capitalismo, de las multinacionales y de la sociedad de consumo. Por lo tanto, el consejo que le darían a Robinson Crusoe sería de este tenor: “desconfíe de ese tipo. Si le ha propuesto intercambiar productos, es porque tiene un plan siniestro para dominarlo y para explotarlo. Si le acepta el trato, usted va a perder la soberanía económica. Va a entrar en una relación de dependencia. Témale a las importaciones. Evite los negocios con extranjeros. Pobres, pero dignos. ¡Vivir con lo nuestro!”

En este escenario, los dos náufragos tendrían que abandonar la posibilidad de especializarse y comerciar. Mantendrían sus respectivas autarquías. El uno se consolidaría con su seguridad alimentaria; el otro, con la seguridad vestuaria. Les quedaría poco tiempo para ir a la playa y menos aún para la poesía. Pero habrían adquirido motivos abundantes para reflexionar acerca de las causales del subdesarrollo. 

Las reformas: laboral y pensional

María Alejandra White

El cierre de la actividad legislativa del Congreso de la República a diciembre de 2002 nos dejó a los colombianos las denominadas reformas laboral y pensional.

La Reforma Laboral derivada de la Ley 789/02 fue trascendental al variar criterios decantados desde la misma expedición del actual C.S.T (Código Sustantivo del Trabajo). Hace un año, por ejemplo, difícilmente se le hubiera ocurrido a alguien sostener que una jornada laboral diurna podía extenderse más allá de las seis de la tarde o que el contrato de aprendizaje no era de carácter laboral.

Los cambios que introdujo la Reforma se reducen básicamente a determinar que la jornada ordinaria es la que se realiza entre las 6 a.m. y las 10 p.m., ampliada en cuatro horas si recordamos que en la legislación anterior dicha jornada se realizaba entre las 6 a.m. y las 6 p.m. La nocturna se redujo, en consecuencia, de las 10 p.m. a las 6 a.m. Para esta decisión se consideró, según el debate que se dio, que esta reducción de costos estimularía a muchos empresarios para adelantar actividades durante el lapso de las 6:00 a las 10:00

p.m., con la consiguiente generación de empleo.

En cuanto al trabajo dominical y festivo se remunerará con un recargo de 75% sobre el salario ordinario, el cual equivalía a 100% antes de la Reforma; de la misma manera, el día de descanso del trabajador no será ya forzosamente el domingo, pues po-

drá ser convenido entre las partes del contrato laboral para ser disfrutado el sábado. Se precisa que estas dos disposiciones, por vía de excepción, operarán a partir del día 1° de abril de 2003 en relación con los contratos realizados con anterioridad a la vigencia de la Reforma, pues para los nuevos se regirá desde la fecha de su celebración.

En cuanto al descanso de las vacaciones, cuando sean compensadas en dinero, la fracción de año a reconocer y pagar será ahora de tres meses y no de seis como estaba previsto en la anterior legislación, lo cual resulta más favorable para el trabajador.

Respecto a las indemnizaciones pagadas por el empleador en los eventos en que termina el contrato de trabajo sin justa causa, la Reforma modificó su determinación dependiendo del monto salarial devengado por el trabajador. Aunque la nueva tabla indemnizatoria también prevé una tasación por tiempo de servicio, ésta se disminuye a 30 días de salario por el primer año para los trabajadores con salario inferior a 10 smlv y a 20 días de salario cuando el salario fuere superior a 10 smlv, en contras-

	Antes	Hoy
Jornada diurna	6 a.m. a 6 p.m.	6 a.m. a 10 p.m.
Pago horas extras diurno	25%	25%
Recargo nocturno	35%	35%
Pago dominicales y festivos	200%	175%
Recargo dominical		
Horas extras diurno	225%	200%
Recargo dominical		
Horas extras nocturno	275%	250%

te con la tabla anterior que era de 45 días por el referido primer año, para todos los trabajadores. En adelante, para el primer grupo de trabajadores, a partir del segundo año se pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos ya mencionados y para el segundo grupo, 15 días de salario adicionales sobre los primeros 20 días. La Reforma deja incólume, por tratarse de un derecho adquirido, la tabla indemnizatoria prevista en el DL (Decreto Laboral) 2351/65 para quienes estaban vinculados laboralmente al entrar en vigencia la Ley 50/90.

La indemnización moratoria prevista en el Artículo 65 del CST, o pena que se le impone al empleador que no paga al trabajador los salarios y prestaciones a la terminación del contrato de trabajo, sufrió una gran transformación, pues no obstante que en principio se conserva la misma sanción “una suma igual al último salario diario por cada día de retardo”, la Reforma la limitó a dos años a partir de los cuales se pagarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, es decir, a partir del tercer año hasta cuando se efectúe el pago “dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”. Antes de la Reforma, el día de salario por día de retardo comprendía desde el momento en que se debió haber efectuado el pago y la fecha en que éste realmente se realizaba, lo cual continúa igual para los trabajadores que devenguen un salario mínimo legal mensual.

En cuanto al contrato de aprendizaje, éste de alguna manera pierde su carácter de laboral, pues si nos atenemos a la definición que trae la Reforma este contrato tiene unas características que lo diferencian notoriamente del anterior, al no considerarse como actividad laboral sino desarrollo de una formación teórico-práctica y lo perci-

bido ya no se denomina salario sino apoyo de sostenimiento mensual.

Dentro de la Reforma Laboral se introducen novedades y cambios en otros aspectos tales como la creación de un subsidio temporal al desempleo que se otorgará en las épocas señaladas por el Gobierno Nacional que reglamentará los requisitos de selección, beneficiarios y demás condiciones para obtener y conservar el derecho a través del Fondo de Subsidio al Empleo y al Desempleo como una cuenta adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Protección Social).

De igual manera, se consagró que los jefes cabeza de hogar, con o sin vinculación anterior de por lo menos un año a una caja de compensación familiar, tienen derecho a un subsidio de 1.5 smlv que se pagará en seis cuotas mensuales iguales, subsidio que estará a cargo del Fondo para el Fomento del Empleo y la Protección del Desempleo, recursos administrados por las Cajas de Compensación Familiar con el fin de apoyar al empleo y proteger al desempleado. Los desempleados con vinculación anterior con una caja tendrán igualmente derecho a programas de capacitación y recreación bajo las mismas condiciones durante un año a partir de la acreditación como desempleado, con cargo a los recursos propios de las cajas; además, tienen derecho a una capacitación para el proceso de reinserción laboral y que le corresponde al mencionado Fondo.

Fue creado un subsidio temporal al empleo orientado a las pequeñas y medianas empresas que generen puestos de trabajo para jefes de hogar desempleados, administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual sólo se dará por trabajadores adicionales, cuyo salario sea el mínimo legal vigente y el límite de este subsidio por empresa será definido por el Gobierno Nacional. De igual forma, se otorga un subsidio familiar

en dinero a trabajadores cuya remuneración mensual sea hasta 4 smlv si cumple con un mínimo de 96 horas trabajadas al mes, pero no debe sobrepasarse un ingreso de 6 smlv al sumarse los ingresos del cónyuge o compañero (a). No estarán obligadas al pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, siempre que el valor de los aportes exentos no supere 10% de los aportes realizados por la empresa en forma ordinaria, las empresas que vinculen trabajadores adicionales, bajo la condición que no devenguen más de 3 smlv y sean reinsertados, personas entre los 16 y 25 años, jefes cabeza de hogar, personas con disminución en más de 25% en la capacidad laboral o personas mayores de 50 años.

De igual forma, fueron adicionales funciones a las cajas de compensación familiar, dentro de las cuales podemos destacar la función de invertir en regímenes de salud, riesgos profesionales y pensiones y la administración de actividades de subsidios en dinero, recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales, concediéndoseles la facultad de manejar el subsidio de vivienda, actividad que tuvo a su cargo el Inurbe.

Analicemos ahora la Reforma Pensional consagrada en la Ley 797 de 2003. Se trata en síntesis de unos ajustes a la Ley 100 de 1993, adicionados con unas normas especiales. Ante la imposibilidad de hacer mención específica a todos y cada uno de los aspectos de la Reforma, se destacan los siguientes cambios respecto de la normatividad vigente desde la Ley 100 de 1993: afiliación obligatoria para los trabajadores independientes; el traslado entre regímenes sólo podrá hacerse una sola vez cada cinco años a partir de la selección inicial, teniendo en cuenta que después de un año de vigencia de la Reforma el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuan-

do le faltaren diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión; se fortaleció el fondo de solidaridad pensional para comprender a otros sectores de población; se derogó la posibilidad de sustituir semanas de cotización con el cumplimiento de otros requisitos y se prohibió el otorgamiento de pensiones que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados.

Consecuente con lo anterior, se modificó el Artículo 15 de la Ley 100 respecto de los afiliados al Sistema General de Pensiones, de tal manera que serán cotizantes obligatorios, además de quienes laboran de manera dependiente, todas las personas naturales que presten servicios “bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio”; los servidores públicos de Ecopetrol que ingresen a partir de la vigencia de esta Ley también tendrán el carácter de afiliados obligatorios; los servidores públicos en cargos de carrera administrativa afiliados al régimen de prima media deberán permanecer en dicho régimen mientras mantengan tal calidad durante los tres años siguientes a la vigencia de esta Ley; así mismo, quienes ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa estarán obligados a afiliarse al ISS. En materia de aportes la norma prevé unas modificaciones que se sintetizan así: durante el año 2003 la cotización seguirá siendo de 13.5% del salario, a partir de 2004 será de 14.5%, para 2005 de 15% y a partir del año 2006 será de 15.5%.

Un aspecto central de la Reforma lo determinan los requisitos para obtener la pensión bajo el régimen de prima media con prestación definida, pues si bien es cierto que en principio se mantienen las edades de 55 y 60 años para mujeres y hombres respectivamente hasta el año 2014 para poder optar al dere-

cho pensional y a partir de ese año en 57 y 62 años respectivamente, se derogó el parágrafo 3 del Artículo 33 de la Ley 100 en virtud del cual, cuando el trabajador lo estimaba conveniente, podía seguir trabajando y cotizando durante cinco años o más para aumentar el monto de la pensión o para completar requisitos si fuere el caso, erigiéndose ahora en justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal reglamentaria que el trabajador cumpla con los requisitos para tener derecho a la pensión, cuando sea reconocida o notificada. Si transcurridos 30 días de haber cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión, el trabajador no solicita su reconocimiento, el empleador podrá hacerlo.

En cuanto al monto pensional, el actualmente previsto en el Artículo 34 de la Ley 100 se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2003. A partir del 1º de enero del año 2004 se modificará el monto mensual de la pensión de manera decreciente según fórmula incorporada en la nueva disposición.

Se modifican igualmente los requisitos para obtener la pensión de invalidez por riesgo común, diferenciándose cuando la invalidez sea causada por enfermedad o por accidente; en cuanto a la pensión de sobrevivientes, se diferencia para efectos de reconocimiento del derecho cuando el deceso del afiliado es causado por enfermedad o por accidente. Respecto de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, se imponen nuevos requisitos para éstos en materia de tiempo de convivencia con el fallecido.

En cuanto a la garantía de pensión mínima de vejez bajo el régimen de capitalización, se mantienen los requisitos básicos del Artículo 65, pero el responsable de su pago no será el Gobierno Nacional como hasta ahora, sino el Fondo de

Garantía para la pensión mínima de este régimen.

La Reforma incorpora una obligación para el Gobierno Nacional de implantar un registro único de afiliados al Sistema General de Pensiones, al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Sistema de Riesgos Profesionales, al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar.

Se dota al presidente de la República de facultades extraordinarias durante el término de seis meses para expedir normas con fuerza de ley para reformar el régimen pensional del presidente de la República, de las Fuerzas Militares y de Policía.

En cuanto al régimen de transición, se modificaron los incisos 2 y 5 en materia de traslado entre regímenes y se introduce un parágrafo (el 2) para enfatizar el respeto a los derechos adquiridos de quienes hoy tienen la calidad de pensionados de jubilación, vejez, invalidez, sustitución y sobrevivencia. La Reforma introduce una modalidad de revocatoria de las pensiones de manera directa, aun sin consentimiento del particular, cuando éstas hubieren sido reconocidas irregularmente.

De la misma manera se incorporó una disposición en virtud de la cual procede la revisión de reconocimiento de sumas periódicas mediante providencias judiciales a cargo del Tesoro Público a solicitud del gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. Esta revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

Las anteriores fueron a nuestro juicio las principales modificaciones realizadas tanto al régimen laboral con la Ley 789 de 2002 como al régimen pensional con la Ley 797 de 2003. **ANIF**